

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.



EFFECTOS DE LA VIOLENCIA CONTEXTUAL SOBRE LA CONFIANZA EN
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD: EL IMPACTO DEL ENTORNO SOBRE
ACTITUDES POLÍTICAS

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERANCIONALES

PRESENTA

DIEGO RENÉ GALICIA OSTRIA

DIRECTORA DE LA TESINA: DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ

Agradecimientos

A mi mamá, por ser el mejor ejemplo de trabajo duro y la perseverancia; sin ti, no hubiera llegado hasta este punto. A mi hermano Raúl y mi hermana Mariana por nunca dudar de mí. A mi papá, por su cariño incondicional.

A LECO 2016 por empezar este viaje conmigo. En especial, gracias a Arne e Isabel por nunca soltarme y por todo el amor. A CPyRRII 2017 por recibirme con los brazos abiertos. Sobre todo, gracias a Ana, Natalia, Sofía, André, Caro, Nina, Miranda, Iki, Juan Martín y Pablo por las risas y por estar siempre que lo necesité.

A mis sinodales. Gracias Amalia Pulido por confiar en mí, escucharme y dirigirme en el camino correcto. Gracias Rodrigo Castro por la paciencia, el tiempo, la ayuda y todas las enseñanzas. Gracias Lucía Tiscornia por todas las sugerencias y por retarme a dar el último empujón.

A Elke por recordarme que existe una vida fuera de la escuela. Gracias por las carcajadas y las pláticas interminables.

A Dylan por acompañarme en el tramo final de este proceso.

A todas mis profesoras y profesores. Gracias por la ayuda y por impulsarme a ser mejor estudiante cada día.

Resumen

La confianza en las instituciones es esencial para que logren realizar sus tareas. En el caso de las instituciones de seguridad, la opinión que las personas tienen hacia ellas es especialmente relevante porque es un interfiere en la manera en que los elementos del orden protejan o no a la ciudadanía. ¿Bajo qué condiciones las personas confían en las instituciones de seguridad? La literatura sobre confianza política destaca que el desempeño percibido es determinante para exista apoyo hacia los órganos del gobierno. En cuanto a las instituciones de seguridad, los trabajos previos apuntan a que las percepciones de seguridad y las experiencias directas con el crimen son las dos variables que han guiado los resultados. Esta tesina plantea que el contexto es una variable igualmente importante. El estudio de la confianza en instituciones de seguridad se ha enfocado en percepciones y victimización; el valor explicativo del contexto no ha sido estudiado de la misma manera.

A partir de los datos de México del Proyecto de Opinión Pública de América Latina de 2018 (LAPOP, por sus siglas en inglés), las cifras de defunciones de homicidio por arma de fuego del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y las proyecciones poblacionales del Consejo Nacional de Población (Conapo), fue posible demostrar que los datos objetivos del contexto tienen un efecto sobre la confianza hacia las fuerzas policiales, aunque no sobre la confianza hacia militares. De igual forma —y contrario a investigaciones previas al respecto— el trabajo encontró que entre más insegura se sienta la gente, menos confiará en los militares. Los resultados demuestran la urgencia por mejorar las opiniones hacia los elementos de seguridad. Sin confianza, la violencia aumentará cada vez más.

Índice

1. Introducción.....	1
2. Aproximaciones a la confianza institucional	3
2.1. Confianza política en general.....	3
2.2. Percepciones de inseguridad.....	4
2.3. Victimización	5
2.4. Contexto	6
3. Enfoque en instituciones de seguridad	8
4. Violencia contextual	11
5. Hipótesis.....	14
6. Metodología	15
6.1. Selección del caso mexicano	15
6.2. Estrategia empírica.....	18
6.3. Variable dependiente.....	19
6.4. Variables independientes.....	21
6.5. Controles.....	24
7. Resultados.....	27
8. Discusión de resultados.....	36
9. Conclusión.....	39
10. Referencias.....	41
11. Anexo.....	48

Índice de gráficas y tablas

Gráfica 1: Homicidios en México.....	16
Gráfica 2: Distribución de la confianza hacia policías.....	20
Gráfica 3: Distribución de la confianza hacia militares	21
Gráfica 4: Distribución de tasa de homicidios por arma de fuego a nivel municipal.....	23
Gráfica 5: Valores predichos: percepciones de seguridad y confianza hacia policías.....	31
Gráfica 6: Relación entre percepciones de seguridad y confianza hacia policías.....	32
Gráfica 7: Valores predichos: victimización y confianza hacia policías	32
Gráfica 8: Relación entre victimización y confianza hacia policías.....	33
Gráfica 9: Valores predichos: percepciones de seguridad y confianza a militares.....	34
Gráfica 10: Relación entre percepciones de seguridad y confianza a militares	34
Tabla 1: Estadística descriptiva	28
Tabla 2: Regresión lineal.....	29
Tabla 3: Variables dependientes.....	48
Tabla 4: Variables sociodemográficas	49
Tabla 5: Variables político sociales.....	51
Tabla 6: Percepciones de seguridad y victimización.....	51
Tabla 7: Regresión logística ordenada.....	52

1. Introducción

La confianza en las instituciones gubernamentales es indispensable para la estabilidad política. Una de las funciones principales de los organismos del Estado es guiar las acciones de las personas, es decir, establecer límites normativos. De este modo, construyen los parámetros de lo que está permitido para la ciudadanía. Sin confianza, las instituciones no pueden asegurar ni la estabilidad ni el orden que pretenden instaurar en la sociedad (Morris y Klesner 2010), en especial en países donde no pueden proteger a sus habitantes.

En el caso específico de las instituciones de seguridad —aquellas encargadas de proteger la integridad física de las personas— la literatura al respecto se ha centrado en las percepciones de inseguridad y las experiencias personales de víctimas de la violencia como los principales elementos determinantes de la confianza institucional. Ambas variables indican hasta qué punto estas instituciones cumplen sus tareas y, por ello, son piezas importantes en los estudios de seguridad. Sin embargo, los trabajos previos al respecto han ignorado la importancia del contexto en el que las personas viven. La violencia las rodea merece más atención debido al impacto que puede tener en la opinión pública.

En contextos violentos, no es clara la razón por la cual las personas (des)confían en los organismos de seguridad, pues los elementos del orden fallan en evitar esta situación. Lo anterior genera dudas sobre la relación entre la confianza que las personas depositan en las fuerzas del orden y el contexto en el que operan. ¿Bajo qué condiciones las personas confían en las instituciones de seguridad? En casos donde la violencia es absorbente, la primera expectativa es que el Estado revierta esta situación. De no cumplir con ello, la opinión que las personas tienen hacia los cuerpos de seguridad posiblemente no sea favorable. El Estado tiene como tarea garantizar la seguridad de la población; al no lograrlo, pone en evidencia su falta de capacidad para cumplir con esta obligación. Ante tal desempeño, la confianza de las personas en las instituciones disminuye y, como consecuencia, las personas desaprueban al gobierno y sus instituciones (Norris y Newton 2000).

Los datos sobre las manifestaciones de la violencia (como los homicidios) en los entornos donde viven las personas son indicadores útiles acerca del desempeño de las instituciones de seguridad y, por lo tanto, de la confianza que las personas depositan en ellas. Este trabajo contribuye a la literatura que estudia el efecto del contexto sobre la confianza en

las instituciones. Esta tesina sostiene que mientras aumenta la violencia donde las personas viven, habrá una menor confianza en las instituciones de seguridad. Dicho de otro modo, la violencia que rodea a las personas impacta sobre las actitudes hacia los organismos encargados de prevenir y combatir la inseguridad.

Para poner a prueba este argumento, se utiliza el caso mexicano. A partir de 2006, la violencia ha aumentado desmesuradamente. Tan solo entre ese año y 2011, se estima que hubo 50 mil muertes relacionadas con la violencia provocada por el crimen organizado (Molzan, Ríos y Shirk 2012). Los datos que se usan del Proyecto de Opinión Pública de América Latina de 2018 (LAPOP, por sus siglas en inglés), las cifras de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y las proyecciones poblacionales del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Los hallazgos en este trabajo muestran que la violencia contextual influye sobre la confianza que las personas tienen hacia las instituciones de seguridad. Los datos comprueban la hipótesis y, además, revelan la influencia de otras variables sobre la confianza, las cuales podrán abrir nuevos horizontes de análisis que ayuden a comprender este fenómeno. Junto con la literatura previa sobre el tema, este trabajo muestra que es necesario considerar la importancia del valor explicativo del contexto. Es esencial entender la influencia de los datos objetivos sobre la manera en que las personas entienden y viven su entorno.

La división del texto es la siguiente. Primero, es pertinente una revisión de los trabajos que estudian de manera general a la confianza política y, en particular, la confianza a las instituciones de seguridad. Después, se expone el argumento teórico sobre la confianza en ellas en comunidades con altos niveles de violencia. En el siguiente apartado, se presenta la hipótesis y, después, la metodología que la pondrá a prueba. El trabajo finaliza con los resultados y un análisis de los mismos.

2. Aproximaciones a la confianza institucional

2.1 Confianza política en general

En términos generales, la confianza en los estudios políticos se divide en dos categorías: confianza específica y confianza difusa (Easton 1975). La primera alude a la confianza que tienen las personas en una persona, como una o un candidato a un cargo público. El segundo tipo de confianza —que, además, es el enfoque de este trabajo— tiene que ver con la confianza hacia las instituciones del gobierno. La confianza difusa, también llamada por la literatura como confianza política, se ha estudiado tanto como variable independiente como dependiente.

En lo referente a su valor explicativo, la confianza política indica que los y las ciudadanas están satisfechas respecto al desempeño de las instituciones políticas (Hetherington 1998). Lo anterior contribuye al apoyo institucional. En otros términos, un nivel alto de confianza incentiva el apoyo hacia las instituciones gubernamentales (Bailey, Parás y Vargas 2013). Sin embargo, la confianza no solo resulta en aprobación, también impulsa a las personas a involucrarse en las labores que desempeñan las instituciones. Por ejemplo, si confían en institutos electorales, es más probable que salgan a votar, pues dan por sentado que los resultados son fiables (Kim 2014). En general, con una participación extensa de la ciudadanía, la calidad institucional también se fortalece (Morris y Klesner 2010) y, como una de las últimas implicaciones para la vida pública, promueve un ambiente favorable para el desarrollo económico (Efendic, Pugh y Adnett 2011).

Entonces, como variable independiente, la confianza no solo fomenta una relación armoniosa entre los organismos del gobierno y las personas, también genera condiciones propicias para el bienestar social. Este mecanismo se replica para el caso específico de cada institución gubernamental. En el caso de las autoridades de seguridad, la confianza determina cómo quieren las personas que se maneje alguna posible crisis de violencia. Al notar que las instituciones de seguridad no protegen, voltean a ver soluciones más directas y autoritarias, como un mayor despliegue de fuerzas castrenses (Carreras 2013; Blanco 2013). De este modo, la erosión de la confianza modifica preferencias de políticas públicas.

Con una baja legitimidad, otras alternativas que pretendan solucionar los problemas en el país no tendrán una recepción positiva por parte de la ciudadanía y, sin soluciones que puedan

aplicarse, la situación empeorará. La desconfianza, entonces, impulsa los mismos mecanismos que la generan. Así, la confianza en el gobierno queda dañada y, a largo plazo, también la estabilidad democrática (Hetherington 1998).

El objetivo de este trabajo, no obstante, es analizar la relevancia de la confianza política como variable dependiente. Los trabajos que la estudian apuntan hacia los efectos del desempeño institucional en ella. Existen otros que resaltan factores psicológicos y culturales que moldean la confianza política y, si bien merecen una explicación más detallada, el desempeño de las instituciones en sus labores produce una serie de reacciones más inmediatas y directas en las personas. Falta entender estos efectos todavía más.

Si las instituciones realizan un trabajo deficiente, las personas son capaces de notarlo con relativa facilidad. El desempeño de las instituciones en las labores que realizan tienen efectos tangibles en la vida de las personas y, por ello, la gente las puede evaluar inmediatamente (Norris y Newton 2000). Al analizar el desempeño institucional, las personas contrastan sus expectativas normativas de las instituciones contra lo que éstas hacen en la realidad (Grönlund y Setälä 2007). Además, dentro de esta examinación institucional, las personas también dictaminan si el desempeño de estos órganos afectará sus vidas en el futuro (Mishler y Rose 2001). En el caso de que el desempeño presente y esperado no sea óptimo, la confianza institucional reduce consecuentemente ya que también disminuye el bienestar de la ciudadanía (Catterberg y Moreno 2006).

2.2 Percepciones de inseguridad

El nivel de confianza será correspondiente a un desempeño menor de lo esperado. En el caso concreto de las instituciones de seguridad, hay dos variables en particular que han guiado los trabajos y hallazgos respecto a la confianza política: percepciones de seguridad y victimización. En cuanto a las percepciones, la impresión que las personas tienen del nivel de seguridad de su entorno determina cómo se sienten hacia las instituciones cuyo deber es protegerlas. En otros términos, si las personas se sienten inseguras, no evaluarán de manera favorable a los organismos encargados de la seguridad.

Hay resultados que sugieren que las sensaciones de inseguridad en colonias (*neighborhoods*) son determinantes para la confianza que las personas tienen hacia las

instituciones de seguridad (Carreras 2013; Ishiyama et al. 2018). A nivel estatal, las percepciones también tienen una incidencia sobre la confianza: entre más resultados muestren las instituciones de seguridad en diferentes regiones territoriales, más confianza tienen las personas en ellas, en especial con eventos relacionados con el combate al crimen organizado (Blanco 2013).

Sea el nivel de análisis que sea, las personas relacionan el nivel de seguridad que sienten con el trabajo de las instituciones encargadas de protegerlas. Lo anterior tiene implicaciones sobre otros organismos: la inseguridad que sienten las personas genera desconfianza hacia la totalidad de las instituciones del Estado ya que es una evidencia clara de la ausencia del gobierno (Morris y Klesner 2010; Ahmad et al 2011; Bergman y Flom 2012; Carreras 2013; Blanco 2013; De Juan y Pierskalla 2016; Ishiyama et al. 2018).

2.3 Victimización

Las experiencias individuales con la violencia ejemplifican la falta de protección por parte de las instituciones de seguridad. Las víctimas experimentan a primera mano la violencia y, por lo tanto, evaluarán de manera más severa a las instituciones de seguridad que no las protegieron. En países con procesos de justicia ineficientes, las víctimas tienden a un trato insatisfactorio (Carreras 2013). Al reportar sus casos, las víctimas quedan desalentadas por el bajo rigor (Blanco 2013). Lo anterior siembra la impresión de instituciones de seguridad incapaces. Adicional a la degradación de la confianza, las víctimas también reducen su participación general en la vida pública (Bateson 2012).

Ambas, las percepciones negativas de seguridad y la victimización, acentúan la desconfianza. Asimismo y, dado que ambas tienen efectos robustos sobre la fe que las personas tienen hacia las instituciones, la literatura las estudia de manera conjunta. Sobre todo porque sus efectos se derraman sobre otras instituciones relacionadas con la violencia, como en el sistema judicial y su desempeño para llevar a cabo procesos de investigación (Malone 2010).

Dichas variables modifican las actitudes que las personas tienen hacia los órganos gubernamentales y están interconectadas por el mismo fenómeno, es decir, la inseguridad. Además, si bien son diferentes y su impacto en la confianza varía, también las une un contexto de violencia. Las percepciones de inseguridad y las experiencias se sitúan en un lugar

determinado y se entrelazan con él. Por ello, resulta pertinente examinar más el valor explicativo del ambiente y la literatura al respecto.

2.4 Contexto

Aunque creciente, la literatura sobre confianza en instituciones de seguridad aún refleja vacíos. Al concentrarse en experiencias de víctimas y percepciones subjetivas de la violencia, ignoran el contexto como una variable central. La mayor parte de lo que se sabe acerca de la confianza política viene de los estudios de percepciones y victimización, pero también habría que tomar en cuenta los efectos de vivir en un ambiente violento y no solo las opiniones al respecto o las experiencias personales con crímenes.

El contexto se refiere al entorno donde las personas viven e interactúan. Es decir, es donde se desarrollan los eventos diarios. Por esta misma razón, está ligado con el nivel de exposición que los individuos tienen con ciertos fenómenos. No solo es un lugar físico, el concepto también implica el desenvolvimiento de sucesos y su relación con las personas. Es un elemento exógeno al individuo y sus opiniones, por lo cual es necesario analizarlo como una variable independiente adicional a las percepciones y la victimización.

Los contextos violentos representan un riesgo potencial para las personas dentro de un contexto violento. Ciertamente, no todas las personas son afectadas de la misma manera, unas son víctimas y otras no. Sin embargo, el nivel de violencia en una misma comunidad y el riesgo que lo acompaña obliga a estudiar si el contexto afecta actitudes políticas independientemente de las percepciones o de las experiencias directas con delitos. Posiblemente, una persona no tenga que ser víctima o tener ciertas opiniones respecto a su entorno para que la inseguridad alrededor le afecte.

Un primer grupo de investigaciones sugiere que el contexto no influye sobre la confianza en elementos del orden porque no necesariamente interfiere en el día a día de las personas (Ishiyama et al. 2018; Arvanitidis, Economou y Kollias 2016); sin embargo, otro grupo de estudios concluye que, en efecto, sí tiene consecuencias sobre la opinión acerca de las instituciones de seguridad (Blanco 2013; De Juan y Pierskalla 2016). Para ejemplificar lo anterior, el caso de México da luz a la intención de este trabajo: en el norte del país la confianza hacia instituciones de seguridad es menor porque ahí hay un despliegue más evidente de la

violencia debido al tráfico ilegal de drogas que cubre a la región (Blanco 2013). Este trabajo tiene como meta contribuir en el estudio del contexto y sus posibles efectos en la confianza de los individuos.

El objetivo es explorar los mecanismos subyacentes de la confianza hacia instituciones de seguridad. En contextos violentos, estos elementos se enfrentan a diversas manifestaciones delictivas. En sus intervenciones, sin embargo, pueden generar todavía más violencia. Como consecuencia, las personas que se encuentren en estos contextos criminales forman una opinión negativa respecto al manejo del problema por parte de las instituciones. Ante circunstancias en las que la inseguridad es visible y pone la vida de las personas en riesgo, el contexto trasciende la barrera de las perspectivas y experiencias personales, tanto así que es posible detectar un efecto sobre la opinión hacia las instituciones de seguridad.

3. Enfoque en instituciones de seguridad

Entonces, ¿importa el contexto en la confianza política? La evidencia empírica señala que sí. La violencia a causa del crimen organizado tiene efectos sobre distintas actitudes y conductas políticas. Los contextos sumergidos en violencia median las percepciones de seguridad que las personas tienen y, como consecuencia, evitan que salgan a votar en las elecciones (Trelles y Carreras 2012). También existen efectos directos de la violencia contextual sobre hábitos electorales. La violencia, en determinados lugares, alcanza ciertos niveles que impide a las personas a salir a votar ya que las consecuencias de hacerlo pueden ser letales (Ley 2018).

Como respuesta, los gobiernos tienen la opción de recurrir a una gama de soluciones preventivas tales como capacitar a los cuerpos policiales o medidas punitivas como aumentar el número efectivo de ellos y endurecer las penas criminales (Basombrío 2010). También, una opción es el uso auxiliar de las fuerzas armadas. Para el combate y desmantelamiento de grupos delictivos, una de las estrategias de las fuerzas del orden ha sido la captura de líderes de organizaciones criminales (Philips 2015). Dicha decisión suele estar respaldada por la opinión pública en general. En países de América Latina, por ejemplo, suele haber un apoyo amplio por la intervención militar en tareas de seguridad pública (Pion-Berlin y Carreras 2017).

Lo anterior implica una delegación de labores de seguridad y, por lo tanto, un trabajo en conjunto de la policía con las fuerzas militares. Así, ambas instituciones se convierten en las encargadas de la seguridad pública y, con ello, recipientes de la confianza de las personas. La confianza en policías y militares, no obstante, no es la misma; la fuente es diferente. Las principales variables que determinan las opiniones hacia la policía son, en primer lugar, el desempeño y, en segundo lugar, el tipo de interacción que establecen con las personas, es decir, el trato (Jackson y Bradford 2010; Bergman y Flom 2012; Malone y Dammert 2020). En el caso de las fuerzas militares, la confianza proviene de un juicio comparativo: en ciertos países (como los de América Latina), las personas suelen tener opiniones desfavorables de las policías, así que, comparado con ellas, se cree que los militares actúan mejor y respetan derechos humanos (Pion-Berlin y Carreras 2017).

Al margen de la fuente de confianza en ambos órganos de seguridad, la intervención de ambas en la vida pública tiene el objetivo de combatir el crimen organizado y ponerle un alto al

aumento de la violencia. No obstante, la movilización de las fuerzas policiales y militares puede tener efectos diametralmente opuestos a los deseados, en especial si se considera la manera en que las fuerzas del orden pretenden desarticularlas. Los cuerpos criminales suelen estructurarse de manera vertical y jerárquica o como una red, lo cual las hace asociaciones disciplinadas ante el mando (Calderón et al. 2015; Farfán-Méndez 2019). Sin embargo, esto también las hace inestables a componentes desestabilizadores.

Además, esta es una de las razones principales por las cuales aumenta la violencia. Cuando el objetivo es un líder clave del grupo, el supuesto orden se rompe (Calderón et al. 2015). De manera más concreta, incluso cuando el blanco de las instituciones de seguridad es un líder secundario (como un operador de meras transacciones financieras) la cadena de mando sufre alteraciones considerables (Phillips 2015). Lo anterior conlleva a una fractura disciplinaria de los integrantes del grupo. Como consecuencia, las manifestaciones de la violencia se multiplican, pues al debilitarse, los grupos criminales pelean entre ellos para conquistar distintos territorios (Calderón et al. 2015) o bien, surgen disputas internas para asumir el liderazgo (Insight Crime 2020).

La inserción de las fuerzas armadas puede dejar a su paso un número considerable de víctimas y, así, ser un componente adicional de inseguridad. Los elementos militares no están particularmente entrenados para escatimar en daños a la hora de actuar (Pion-Berlin y Carreras 2017). Los encuentros contra cárteles suelen generar más violencia porque la estrategia de seguridad es represiva, no preventiva (Lessing 2015).

En cuanto al caso de países latinoamericanos, hubo una democratización a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Sin embargo, también arrastraron ciertas prácticas de gobiernos previos, como la corrupción, impunidad y el corporativismo. Como una extensión institucional del gobierno, el Ejército actúa sin restricciones, lo cual resulta en detenciones arbitrarias, ejecuciones y desapariciones (Acosta 2011). Los elementos militares son entrenados para usar la violencia como medio principal de combate. También, son recluidos lejos de la población civil y eso queda manifestado en su trato con las personas, pues, en la realidad, no suelen tener un tacto cuidadoso respecto a derechos humanos (Bailey, Parás y Vargas 2013).

Aún así, existe evidencia sobre el impacto diferenciado en la población respecto a las intervenciones militares. Por ejemplo, no todas las personas reaccionan igual ante un conflicto armado en el que destaca la presencia militar. Hay comunidades que pueden estar a favor de

ello y tolerar la participación de fuerzas armadas, lo cual, de hecho, es un indicio de que un contexto violento no afecta a todas las personas de la misma manera (Bateson 2017).

La cuestión de las policías es similar. Dentro de sus actividades se tienen que involucrar de manera cercana con la gente, detener conflictos con el uso mínimo de la violencia y todo esto llevarlo a cabo con un apego a derechos civiles y proceso legales. No obstante, suelen ser simples extensiones de las fuerzas militares o están subordinadas bajo un mando militar, lo que las hace operar con estrategias de este tipo (Bailey, Parás y Vargas 2013). El daño intencional por parte de las instituciones de seguridad sobre la confianza merecería ser revisado ya que se trata de agravios del Estado contra quienes deben proteger, sin embargo, se sale del foco de este estudio.

La intención de este trabajo solo es revisar el impacto que existe cuando los elementos de seguridad no logran contener el aumento de la violencia. Los esfuerzos de la policía y la presencia creciente de los militares pueden resultar en más conflicto y generar un círculo vicioso donde apostar continuamente por una política militarizada genere más y más violencia. En circunstancias donde no parece haber un remedio para la inseguridad durante un periodo prolongado de tiempo, las personas empezarán a desconfiar de las fuerzas del orden (Blanco 2013).

4. Violencia contextual

Este trabajo argumenta que, a partir de la existencia y prevalencia de sucesos violentos en un contexto determinado, existe una relación inversa entre la violencia del entorno y la confianza hacia los actores que luchan para disminuirla. Es decir, a mayor violencia, menor confianza política. Cuando estos incidentes dejan de ser eventos aislados y empiezan a consumir la totalidad de la vida de las personas, resulta relevante evaluar el funcionamiento de las instituciones. La violencia desmedida es un constante recordatorio de la falta de eficiencia de los elementos de seguridad. Es posible, sin embargo, que la violencia criminal provenga directamente de las disputas entre diferentes organizaciones criminales por el control del territorio y no por el combate que se desdobra con las instituciones de seguridad (Phillips 2015). Aún así, esto exhibe todavía más la incapacidad de los organismos de seguridad para defender a las personas de las consecuencias de dichas disputas.

Ahora, también es preciso admitir que la presencia de grupos del crimen organizado no necesariamente representa en una amenaza a la seguridad de las personas. Pueden, de hecho, instaurar esquemas de gobernanza criminal y con ello pretender que no hay violencia. Lo anterior deriva de una cohesión entre células del crimen organizado en determinadas regiones (Cruz y Durán-Martínez 2016). La aparente falta de violencia también puede ser producto del involucramiento del Estado, pero regulada por los principales perpetradores de la violencia. Los criminales hacen tal uso de su fuerza que les permite operar sin obstáculos determinantes. Los grupos delictivos pueden alcanzar una organización óptima para administrar provechosamente sus territorios. Sin embargo, esto no significa que no exista la violencia, solo que es menos visible.

A pesar de la capacidad extensa de grupos del crimen organizado para dominar un territorio (Trejo y ley 2019), la posibilidad de un conflicto a partir de la ruptura de la cadena de mando es latente. Además, el hecho de que exista una gobernanza criminal y la toma de poder por parte del narcotráfico deja todavía más en evidencia a los elementos de seguridad y al Estado. En línea con los trabajos de confianza política en general, si el desempeño de las instituciones es bajo, entonces la gente desconfiará de ellas.

A mayores niveles de violencia, mayor será la necesidad de protección a las personas. No obstante, como este fenómeno es en sí una señal de una incapacidad de prevención y

respuesta, las instituciones están destinadas a fracasar en las evaluaciones que los individuos hagan de ellas. Existen posturas que difieren con lo anterior. En contextos violentos, es posible que la confianza no sea afectada porque las personas consideran que los sucesos son acontecimientos aislados y relativos a disputas no pertenecientes a la vida pública (Arvanitidis, Economou y Kollias 2016) y que no transforman las relaciones sociales de las personas (Ishiyama et al. 2018).

Aún así, los actos violentos revelan la ineficiencia de las instituciones, pues es claro que, por una parte, no son capaces de prevenir; por otra parte, tampoco responden correctamente ante ellos. Los ataques violentos de candidatos y candidatas en las elecciones de México son una prueba constatable de que la violencia no es atípica, sino que es recurrente y visible (Pulido 2020). No es del especial interés de los grupos criminales en mantener sus operaciones aisladas de la vida pública.

Más aun, esto es un ciclo que se auto refuerza. Debido a su falta de profesionalidad, las fuerzas de seguridad no logran proteger. Lo anterior genera que los ciudadanos dejen de reportar casos y que dejen de informar a las policías de criminales y pandillas (Pion-Berlin y Carreras 2017). Las implicaciones de este problema apuntan, sin embargo, a otra cuestión. La violencia es señal de una crisis más grave que la mera confrontación entre las fuerzas del orden y los grupos del crimen organizado. La raíz del problema es, en realidad, una incapacidad institucional generalizada (Gohdes y Carey 2017). En estos contextos, las situaciones de violencia que se manifiestan diariamente son delatorias. La violencia expone la disfuncionalidad de las instituciones y provoca sean examinadas con mayor rigor ya que no cumplen con su desempeño mínimo (De Juan y Pierskalla 2016).

Asimismo, el aumento del crimen organizado pone a prueba la (in)capacidad que tienen los elementos de hacerles frente y, a su vez, genera una comparación entre instituciones que en apariencia son estructuradas (grupos del crimen organizado) e instituciones no profesionalizadas y sin un entrenamiento en protección de derechos humanos (sobre todo las policías). Lo anterior deja aún más en manifiesto las acciones contraproducentes de las instituciones del orden (Acosta 2011). Estas políticas de seguridad dejan desamparadas a las personas y, de seguir así, la confianza que en ellas depositen será cada vez menor.

Así, la sensación de desprotección por parte del Estado y sus instituciones se exagera, lo que denota una falta de interés real para proteger a las personas (Blanco 2013). Las

implicaciones a largo plazo no son menores. Sin confianza en las policías, ni en los militares, ni en un proceso judicial, las personas dejan de reportar los crímenes. La falta de cooperación con las instituciones de seguridad afecta su calidad puesto que no generan experiencia para resolver los problemas de violencia relacionada al crimen organizado (Soares 2004). La falta de confianza generada por la violencia y la respuesta corta de las instituciones genera, como consecuencia, todavía más violencia.

Esto cobra más importancia en los contextos donde la violencia suele estar focalizada. Existen puntos estratégicos para los grupos del crimen organizado ya que esta está típicamente segmentada por actividades (von Lampe 2015). Una de las principales es el tráfico de drogas. En ciertas regiones, donde hay niveles altos de violencia que, están relacionados estas actividades, la confianza en las instituciones disminuye (Blanco 2013). Además, la existencia de lugares donde la criminalidad es alta implica que existen otros contextos en los que el caso es completamente opuesto, es decir, donde las personas sí confían en las instituciones de seguridad. Este contraste es otra evidencia de la incapacidad de las instituciones en algunos lugares.

Habitar en un ambiente abrumador cambia la perspectiva de las personas acerca del funcionamiento institucional, en especial en un espacio de tiempo prolongado. La violencia criminal pasa de ser solo una posibilidad remota a una realidad amenazante. Es posible que, a partir de esto, pueda haber lugares donde se normalice la violencia. La inseguridad es un fenómeno extensamente difundido en varias partes del mundo. Por ejemplo, en América Latina suele ser una situación cotidiana para muchas personas de la región (Davis 2015).

Sin embargo, esto no implica que se acepte (Lemaitre 2014). Afecta a las personas y, de hecho, no hay evidencia concluyente de que los niveles de violencia generen un proceso de disociación en cuanto al impacto y el trauma que la inseguridad implica (Ng-Mak, Slazinger y Feldman 2002). Incluso, en zonas de conflicto donde ha habido violaciones de derechos humanos, las personas conservan la expectativa de recobrar el orden (Margold 1999). Si bien la violencia representa una realidad común para unas personas, lo cierto es que no es normal.

5. Hipótesis

En contextos donde la violencia se concentra, la seguridad de las personas está en riesgo. Este trabajo tiene el objetivo de demostrar que el contexto puede trascender las percepciones y que una persona no tiene que necesariamente ser víctima para que le afecte. Por sí solo, el contexto tiene un efecto sobre la confianza política en las instituciones de seguridad. A partir de lo anterior, la hipótesis de este trabajo es:

H₁: A mayor aumento de la violencia relacionada al crimen organizado en el contexto donde las personas viven, la probabilidad de confiar en las instituciones de seguridad disminuirá.

Esta primera hipótesis ilustra un mecanismo que incluye distintos planos de interacción y conductas. En otras palabras, lo que ocurre en un nivel macro repercute en actitudes a nivel micro. La violencia no solo afecta a las instituciones de seguridad, las personas que viven en los contextos también se encuentran en medio de los conflictos violentos. La expectativa es que estas circunstancias modifiquen sus opiniones.

Es importante, no obstante, considerar los elementos que comúnmente han tenido un valor explicativo relevante. Ante esto, surge la necesidad de incluir las variables que por excelencia han guiado los resultados en esta materia. Así pues, como hipótesis alternativas, este trabajo presenta las siguientes:

H₂: Mientras las percepciones individuales de inseguridad aumenten, la confianza en las instituciones de seguridad disminuirá.

H₃: Si una persona es víctima de violencia, entonces la confianza que tenga hacia las instituciones de seguridad será menor.

Estas hipótesis son relevantes porque no es posible ignorar la robustez que presentan en los trabajos anteriores y porque es necesario ponerlas a dialogar con la hipótesis principal. Las tres variables están relacionadas entre sí y, por lo tanto, una comparación mejorará el entendimiento que existe sobre ellas.

6. Metodología

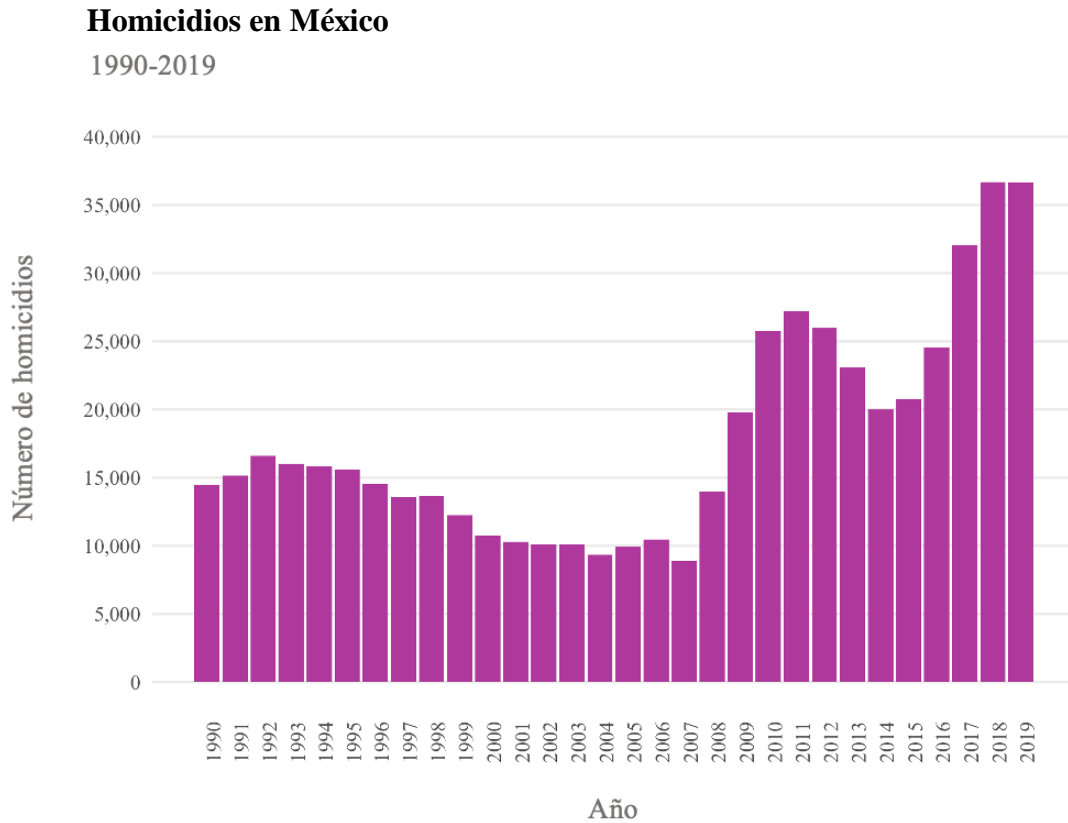
6.1 Selección del caso mexicano

Para evaluar el argumento y poner a prueba la hipótesis, este trabajo utilizará el caso mexicano. Similar a otros países de la región, la seguridad en México empezó a estar en declive a inicios de la década de los 2000's. El gobierno empezó a ser rebasado por el crimen y su respuesta fue deficiente (Bailey, Parás y Vargas 2013). Parecido al caso mexicano, Colombia se encontraba en el pico de la violencia entre la década de los 80's y 90's. La crisis en Brasil también comenzó a mediados de los 80's. A los tres países los une la misma estrategia por parte de sus gobiernos: un enfrentamiento militar (Lessing 2015).

Los cárteles de drogas parecían más preparados y organizados. Gradualmente, estas organizaciones empezaron a ser el foco de atención de las políticas de seguridad en la región. Su forma de operar se volvió cada vez más violenta y esto sucedió paralelamente con la introducción de las fuerzas militares en conjunto con las policías.

Los homicidios en México decreció en la década de los 90's y parecía seguir el mismo ritmo a principios del nuevo siglo. La gráfica 1 ilustra esto. Sin embargo, el país empezó a ser escenario de mayores conflictos entre bandas criminales a partir de entonces, sobre todo de organizaciones comúnmente conocidas como cárteles (Bailey, Parás y Vargas 2013). En el 2006, el entonces presidente Felipe Calderón definió el inicio de su sexenio con la intención de combatir al crimen organizado. En ella, ha privilegiado el uso de las fuerzas armadas como nunca antes en la historia reciente de México, lo cual ha tenido efectos contrarios a los esperados.

Gráfica 1



Elaboración propia con datos del INEGI

La violencia criminal ha estado en la discusión pública desde la década de 1990 a partir del proceso de democratización en el país (Trejo y Ley 2017), pues la fragmentación de un Estado centralizado con una fuerza robusta de control genera desestabilización para regular la seguridad (Davis 2006). También, tampoco es que antes de la democratización no haya habido un número alto de homicidios, pero con ella también hay más transparencia en el reporte de diferentes datos públicos (Hollyer, Rosendorff y Vreeland 2011).

Al margen de lo anterior, también es cierto es que la decisión del expresidente Calderón de desplazar a las fuerzas armadas a las localidades de los estados agravó la situación. El aumento abrupto de los enfrentamientos, extorsiones, homicidios y secuestros coincide con el despliegue de las fuerzas armadas contra los cárteles (Nerio Monroy 2011).

El problema persiste y trastoca de manera profunda aspectos de la vida pública en México. Las políticas pacificadoras que ha implementado el país han ocasionado que los

cuerpos del orden simplemente esparzan a los grupos del crimen organizado, lo cual cambia la vida de las personas en las localidades (Tealde 2019). Un ejemplo concreto de ello sucede cada tres años en periodos electorales. Las elecciones en el país representan una muestra del contexto de violencia y su gravedad ya que las y los candidatos son atacados e incluso asesinados. El interés por estos personajes para influir en el sistema político da cuenta de qué tan arraigada está la violencia (Pulido 2020). Lo que les importa a algunos grupos no es conquistar al Estado del lugar en el que están, sino que lo usan para contenerlo y convertirlo en una herramienta que les permita operar sin trabas (Lessing 2015).

En el país, hay localidades que prácticamente son regidas por el crimen organizado (Pereyra 2012) y, a pesar de las peticiones de los gobiernos municipales para acabar con la situación, hay una voluntad política cerrada (Uildiks 2009). El aumento de la violencia en la vida pública de México representa un caso que permite evaluar la posible variación en la confianza política. El hecho de que cada año el número de homicidios aumente es muestra de ello (INEGI).

Esto no solo es un problema que se focaliza en un punto del país. La violencia tiene dinámicas regionales y temporales que merecen un análisis. El norte del México tiene un historial amplio de contar con una red extendida del crimen organizado. Al ser frontera con Estados Unidos, estos estados son sitios atractivos para las redes criminales. Toda la región del norte, desde Baja California hasta Tamaulipas, cuenta con puntos clave para transportar drogas al otro lado de la frontera (Medel, Lu y Chow 2015).

Si bien el crimen organizado se extiende cada día a más regiones de México, la cobertura no es homogénea y no alcanza los mismos niveles en todos los estados. Asimismo, los grupos criminales tampoco operan de la misma manera. El despliegue creciente de fuerzas militares a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico fragmentó a los grupos delictivos. Como consecuencia, surgieron otras manifestaciones de la violencia y las economías criminales se diversificaron (Moncada 2013).

La diferenciación sugiere distintos niveles de concentración de grupos criminales en ciertos puntos del país y, como expectativa de este trabajo, esto debería tener un efecto en la confianza. En una primera aproximación superficial, los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2017) muestra diferencias en la confianza entre cada estado. Si se comparan dos estados opuestos en niveles de violencia como

Guanajuato (uno de los estados más inseguros actualmente) y Yucatán, es posible obtener una idea inicial de la variación en la confianza. En Irapuato, municipio donde se concentra la mayoría de los homicidios en Guanajuato (el 15% del estado en el 2020, según INEGI) tan solo el 48% de las personas confían en la policía municipal. Como contraste, en Mérida, el 79% de las personas confía en la policía.

A partir de todo lo anterior, será posible examinar posibles cambios en la actitud política de los individuos en México. En fin, la guerra contra el narcotráfico es uno de los conflictos subnacionales que más vidas ha cobrado en la historia reciente del país. No afecta de la misma manera en todos los lugares y, a raíz de ello, es posible que las actitudes políticas cambien.

6.2 Estrategia empírica

El trabajo tiene como objetivo evaluar la opinión de las personas con respecto a las instituciones de seguridad. El principal recurso que el trabajo utiliza es la encuesta LAPOP. Es necesario unir esta base de datos con registros poblacionales de defunciones del INEGI y los datos de población municipal del Conapo.

LAPOP ofrece los datos necesarios para responder a la hipótesis. Además, tiene la virtud de ser una encuesta realizada con regularidad (y desde hace más de tres décadas) en 34 países del continente americano, lo cual es testimonio de su confiabilidad y rigor. Las variables contextuales están condensadas en la información sobre defunciones del INEGI y las proyecciones de población del Conapo de los municipios de México.

El levantamiento de LAPOP que este trabajo toma en cuenta es el que fue llevado a cabo a finales de 2018 y a inicios de 2019. Tras un proceso extenso de violencia (desde 2006 a 2018), es posible tener una mejor apreciación del estado actual de la confianza. Existen más de 10 años entre el levantamiento de interés y el año en que la situación de inseguridad empeoró. Son más de 10 años de vivir repercusiones violentas sin precedentes y de constantemente reevaluar a las instituciones cuyo trabajo es proteger a las personas.

Los individuos representan la unidad de análisis del trabajo. Debido a la captura de datos individuales de LAPOP y la atención especial sobre solamente un levantamiento, el análisis es transversal. La comparación de diferentes personas en distintas circunstancias (y en un mismo

momento) permite, por una parte, una diferenciación precisa del impacto de la violencia y, por otra, una examinación acerca de los efectos del contexto de cada individuo (Ley 2018).

Más allá de las especificaciones anteriores y de las virtudes de la encuesta, es necesario mencionar una de las limitantes de LAPOP. La encuesta no es representativa a nivel municipal. Si bien tiene una muestra de 1,567 observaciones (más que suficiente para analizar la opinión pública de las personas), son tan solo 110 municipios los que contempla. Aún así, la facilidad del manejo de la base de datos y la diversidad de variables con las que cuenta la convierten en una encuesta adecuada para una primera aproximación al fenómeno de la violencia en México a nivel local.

Ahora bien, el trabajo usará un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para comprobar las hipótesis. La variable dependiente (confianza política), en términos estrictos, exige una regresión logística ordenada (modelo jerárquico ologit). Este modelo se caracteriza porque “las observaciones del nivel inferior (micronivel) están anidadas en niveles superiores (macronivel)” (Alarcón et al. 2015) y porque, en el caso de LAPOP, la confianza está codificada en categorías ordenadas. Respecto al contexto, los individuos están agrupados en un municipio. Las personas y el contexto interactúan en distintos planos. En un primer nivel, los individuos coexisten entre ellos, mientras en un segundo escalón, el contexto determina sus opiniones. Sin embargo, es comúnmente aceptado el uso de MCO para más de tres o cuatro categorías; las estimaciones suelen ser coherentes con aquellas que propone una regresión logística ordenada (Atanu y Dap2018).¹

6.3 Variable dependiente

LAPOP contiene preguntas que capturan el nivel de confianza que existe hacia las instituciones de seguridad. Las respuestas están codificadas en categorías que empiezan en el 1 (nada de confianza) hasta el 7 (mucho confianza). Es acertado referir a grados de confianza por medio de opciones categóricas ya que la confianza institucional hace alusión a un proceso de construcción de certidumbre y legitimidad hacia estas instituciones (Levi y Stoker 2000).

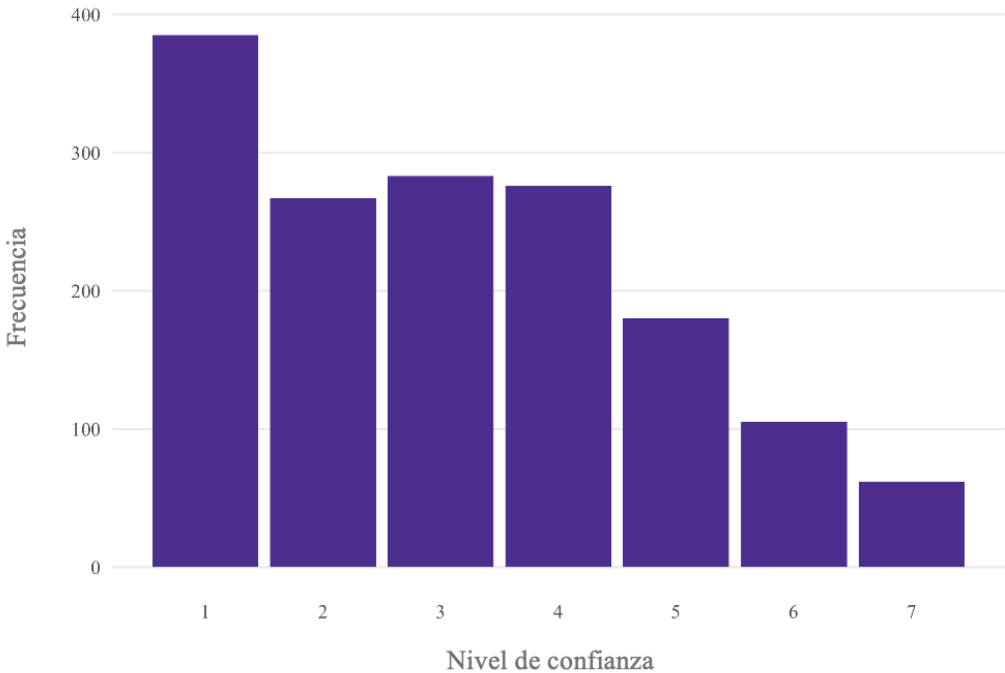
¹ De todas formas, el trabajo presenta también la estimación con el modelo logístico ordenado para respaldar el trabajo a manera de un chequeo de robustez. Esto se puede ver en la tabla de regresión logística en el anexo. En ella, se presenta la probabilidad respecto a las categorías bases de cada variable, mismas que pueden ser revisadas en las tablas 3 – 6.

También, LAPOP tiene preguntas por cada institución del gobierno; este trabajo se enfocará en las fuerzas policiales y las militares. En la tabla 3 en el anexo, se pueden observar estas preguntas con más detenimiento y, para dar una idea inicial de cómo se encuentra la confianza hacia estas instituciones, las gráficas 2 y 3 muestran la distribución de las opiniones.

Gráfica 2

Distribución de la confianza hacia policías

1-nada de confianza; 7-mucha confianza

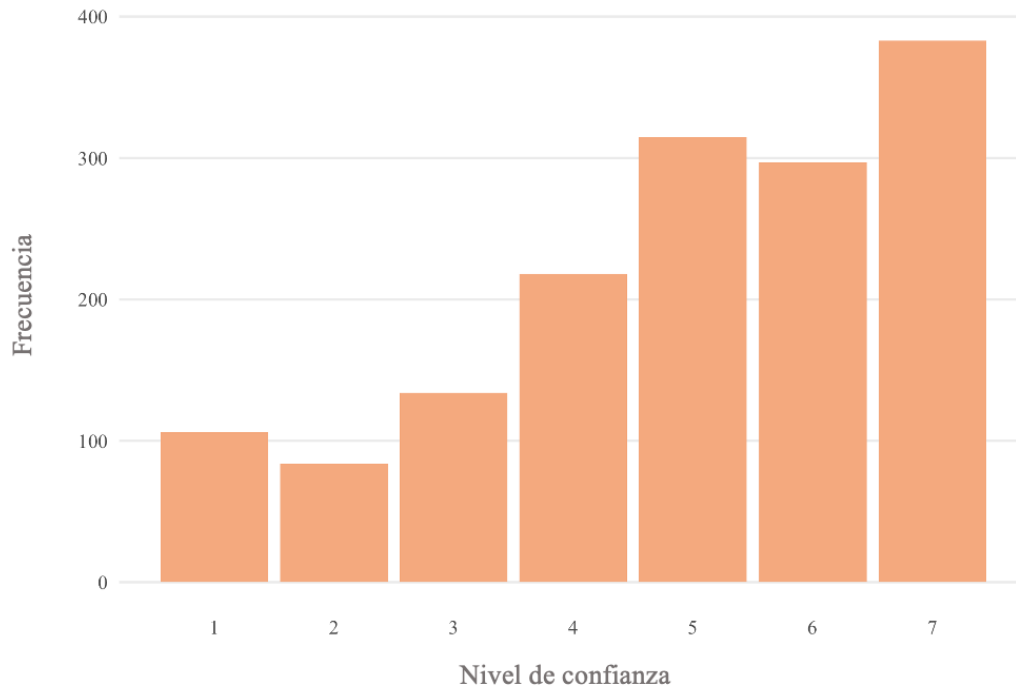


Elaboración propia con datos LAPOP 2018/2019 para México

Gráfica 3

Distribución de la confianza hacia militares

1-nada de confianza; 7-mucha confianza



Elaboración propia con datos LAPOP 2018/2019 para México

6.4 Variables independientes

El objetivo es examinar el valor explicativo que tiene el contexto por sí solo sobre la confianza hacia instituciones de seguridad. En específico, el interés de este trabajo está sobre los contextos violentos y la manera en que afectan la confianza. En la literatura, existe un consenso sobre el uso del número de homicidios como la manera más conveniente de estudiar los trabajos de violencia e inseguridad. Los homicidios constituyen una forma grave y visible de violencia (Buvinic y Morrison 1999). Sin embargo, es probable que las bases de datos capturen un sub o sobre registro y, con ello, un panorama de contextos violentos sesgado. Aún así, lo cierto es que también son relativamente fáciles de cuantificar, a diferencia de otras expresiones de violencia como extorsión o desaparición, por ejemplo (Zepeda y Jiménez 2020).

En concreto, la variable independiente en este trabajo es la tasa de homicidios por arma por cada 1,000 habitantes de cada municipio. Los datos fueron recopilados de la información

del INEGI de 2017, un año previo al levantamiento de LAPOP. Para apreciar una opinión crítica de las instituciones de seguridad, es pertinente usar la información de homicidios un año previo, pues para el momento de la encuesta las personas habrán formado una nueva opinión del desempeño institucional con respecto al estado actual del contexto. La medición de la violencia como una tasa resulta adecuada ya que es una manera de representar la cercanía de los homicidios a las personas.

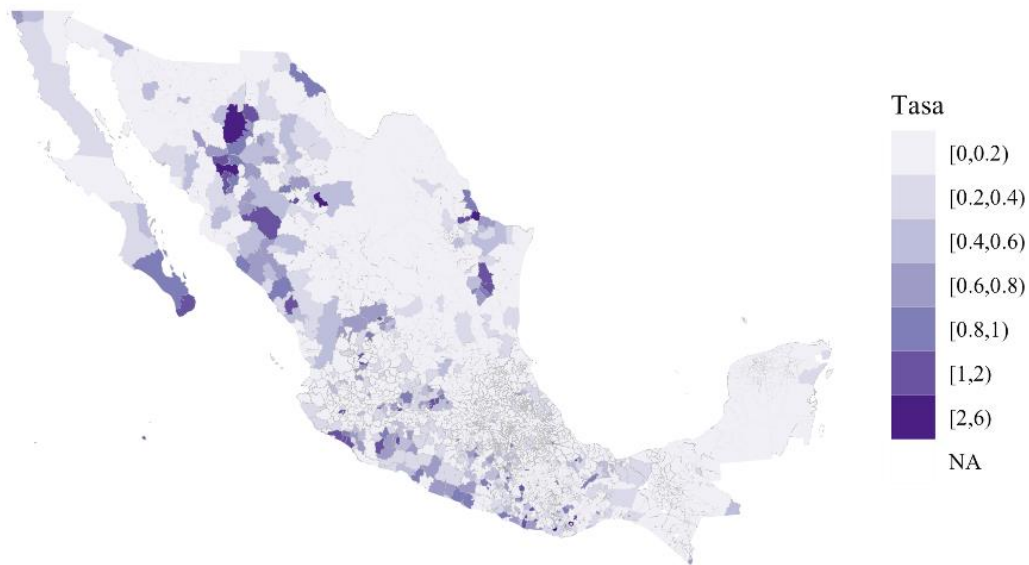
Ahora bien, los homicidios con arma de fuego responden a la forma en la que, históricamente, la violencia del crimen organizado se ha manifestado en México. Además, la cifra no es marginal: en el 2017, el 70% de los homicidios registrados fue a causa del uso de armas de fuego (INEGI 2017). En este tipo de enfrentamiento las fuerzas policiales y militares se introducen como las principales autoridades. La configuración de homicidios bajo esta categoría es una aproximación de medir la violencia relacionada con el crimen organizado y es, a la vez, coherente con una realidad que el país ha tenido que afrontar en años recientes.

La gráfica 4 muestra la distribución de homicidios con arma de fuego en el país. En ella es posible ver que la cobertura no es homogénea. Esto es una razón adicional por la cual se usa como medición de violencia; ante diferencias en los, posiblemente puede haber distintos niveles de confianza.

Gráfica 4

Distribución de tasa de homicidios por arma de fuego a nivel municipal

Tasa por cada 1,000 habitantes en 2017



Elaboración propia con datos del INEGI

Con todo lo anterior en mente, el trabajo tomará a los municipios como el contexto donde coexisten los individuos. Los municipios son demarcaciones políticas mínimas y la referencia contextual más próxima a las personas. La estrategia para codificar la violencia del entorno consiste en dos pasos. Primero, la tasa por cada 1,000 habitantes será calculada a partir del total de habitantes por municipio y del total de homicidios por arma de fuego del 2017. En el segundo paso, este dato contextual se asignará a cada una de las observaciones respectivas en la encuesta. Naturalmente, habrá cifras iguales debido a que LAPOP entrevista a más de una persona del mismo municipio.

El trabajo también añadirá una columna adicional que capture la tasa de intervenciones policiales por cada mil habitantes. Los datos de intervenciones se obtuvieron a partir del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del INEGI. La razón de medir el efecto por las intervenciones también responde a un interés por entender la violencia de más de una manera. Por un lado, las intervenciones policiales indican qué tan inseguro es un lugar; por otro

lado, podrían generar más violencia porque los elementos de la policía suelen incurrir en violaciones de derechos humanos por su falta de profesionalidad.²

6.5 Controles

Con el fin de considerar otros aspectos que puedan tener un efecto sobre la confianza, este trabajo incluye variables de control de tipo sociodemográfico y variables políticas típicamente vinculadas tanto con la violencia como con la confianza institucional. Afortunadamente, con las encuestas de LAPOP, datos del INEGI y el Conapo es posible recopilar todas. Dentro de las sociodemográficas, los *habitantes por municipio*, es decir, el tamaño de la población, puede ser determinante para que una política de seguridad sea implementada y aceptada por la ciudadanía. En teoría, puede ser más complicado llevar a cabo medidas pacificadoras en ambientes inseguros donde el número de personas es elevado (De Juan y Pierskalla 2016) y, también, existe evidencia de que las personas son renuentes a aceptar el apoyo de las intervenciones del gobierno para resarcir una situación de violencia (Flores-Macías y Sánchez-Talanquer 2020). También, más población puede significar una mayor exposición a la violencia, pues tal vez sean puntos de interés de grupos del crimen organizado. Las plazas electorales en municipios estratégicos para estas organizaciones generan competencia para influir en ellas y, consecuentemente, la violencia aumenta (Pulido 2020).

De igual forma, es pertinente controlar por municipios *rurales y urbanos*. La violencia es un problema que sucede con más frecuencia en las ciudades (ENSU 2021), pero esto puede ser simplemente porque en ellas coexisten más personas y, en primera instancia, hay una probabilidad más grande de que sean testigos o víctimas de crímenes. No obstante, el crimen organizado en México opera de una forma diferente. Típicamente, los enfrentamientos ocurren en zonas rurales, porque suelen estar aislados y se mueven bajo una lógica local (Cantor 2014). Aún así, los atentados a plena luz del día contra candidatos municipales en puntos estratégico

² Al haber dos instituciones de seguridad de interés, es necesario hacer dos modelos estadísticos. En el de militares, cabe resaltar, no se introduce la variable de intervenciones policiales porque también es una manera de medir la violencia propia de los policías. Se intentó recabar información sobre denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas militares. Sin embargo, esa información la otorga la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el tiempo de respuesta es tardado.

sugieren que el crimen se está moviendo cada vez más a zonas conurbadas. Por esta ambivalencia, es necesario incluir el tipo de municipio.

El *ingreso* y la *educación* también están asociados con la confianza política. A mayor ingreso, el bienestar de las personas no será afectado por el desempeño de las instituciones y, por lo tanto, confiarán en ellas (Arvanitidis, Economou y Kollias 2016); sin embargo, a mayor educación, las personas serán más críticas de las instituciones (Carreras 2013). De igual forma, a mayor educación, las personas tienden a demandar más servicios y mejor desempeño al gobierno (De Juan y Pierskalla 2016).

Otros trabajos establecen que la *edad* es un eje de variación relevante. Existen dos razones para afirmar lo anterior. En primer lugar, la degradación de la seguridad empezó en la década de los 90's, cuando el rol de los militares en la política de seguridad todavía no era oficial (Trejo y Ley 2017). Por ello, una expectativa es ver niveles de confianza diferenciados con base en la edad de las personas. En segundo lugar, los hombres entre 15 y 39 años son el grupo poblacional en el que más se concentran los asesinatos relacionados al crimen organizado (Calderón 2015).

La especificación anterior también revela la importancia de tomar en cuenta efectos diferenciados por *sexo*. La percepción de inseguridad de las mujeres es mayor que la de los hombres debido a que las políticas de seguridad que los gobiernos de México han, por un lado, aumentado el número de homicidios contra mujeres (Atuesta y Vela 2020) y, por otro lado, las políticas gubernamentales están hechas con un sesgo de género que las desfavorece en general (Carreras 2013; Guzmán 2020). A su vez, las opiniones de las mujeres en temas públicos difieren a las que sostienen los hombres. Por ejemplo, existen reportes que revelan que las mujeres consideran la violencia contra ellas como el tercer problema más importante en el país; los hombres piensan que es el sexto (Guzmán 2020). El fraseo de las variables sociodemográficas y su codificación pueden revisarse en la tabla 4 del anexo.

Dentro del segundo grupo de controles es importante considerar las *actividades relacionales*: la actividad de las personas en la vida pública sugiere cooperación con las instituciones y confianza en ellas (Morris y Klesner 2010). Las actividades relacionales se miden en este trabajo como reuniones municipales con vecinos. Una segunda variable indispensable es la *identidad partidista*. En general, los individuos actualizan sus opiniones con base en sus inclinaciones partidistas (Lewis-Beck et al 2008); es decir, si una política de seguridad es

propuesta y llevada a cabo por el partido de preferencia de alguien, es probable que exista un sesgo positivo, independientemente de los resultados que tenga.

Si el partidismo interfiere en la manera en la que las personas procesan información, lo más seguro es que también determine la importancia que le dan a ciertos temas (Altamirano y Ley 2020), como el desempeño de instituciones de seguridad. Sin embargo, e independientemente del partido, también solo basta con que exista una intención pública por resolver el problema; los resultados no son tan decisivos para el gobierno en turno (Magaloni, Romero y Díaz Cayeros 2013). La manera en la que se modelan estas variables puede verse en la tabla 5.

Para poner en competencia y diálogo este trabajo con la literatura previa, las *percepciones de inseguridad* y la *victimización* también serán analizadas. El trabajo busca que el contexto, comparado con estas variables, tenga un efecto al menos igual que el que ambas tienen en la literatura. La tabla 6 contiene las especificaciones de estas dos variables.

7. Resultados

Al tratarse de una encuesta, cada observación de la base de LAPOP representa un individuo en un municipio. A cada observación se le asignó información adicional: el número de homicidios por arma de fuego en cada municipio, el número estimado de habitantes y las intervenciones policiales. A partir de las observaciones de LAPOP y la información añadida, fue posible generar las principales variables independientes. La primera, la tasa de homicidios por cada 1,000 habitantes, se generó al dividir el número de homicidios en el municipio entre la población total del municipio y luego ese resultado se multiplicó por 1,000. El mismo proceso fue usado para la tasa de intervenciones de la policía. Ambas variables representan un indicador de violencia contextual.

Al mismo tiempo, las dos refieren a diferentes formas de percibir la proximidad de la violencia a la cual se enfrentan las personas en sus respectivos municipios. La tasa de homicidios cubre dos dimensiones de la inseguridad. Por un lado, tiene que ver con la cantidad de homicidios en cada municipio, pero, por otro lado, también es una manera de evaluar el impacto de la concentración de los homicidios. Es decir, es una forma de medir qué tanto varía la confianza a la cantidad y densidad de eventos violentos. Por su parte, la tasa de intervenciones cubre también dos aspectos: es una forma de medir la inseguridad, pero también es una manera de evaluar si las personas se sienten inseguras con la presencia de policías. En la siguiente tabla de estadística descriptiva se pueden observar algunas características de las variables anteriores y de las demás que se incluyen en el modelo.

Tabla 1: Estadística descriptiva

Variable	Observaciones	Mínimo	Máximo	Desviación estándar	Media	Tipo de variable
Confianza hacia policías	1,558	1	7	1.74	3.1	Categórica
Confianza hacia militares	1,537	1	7	1.81	4.94	Categórica
Tasa de homicidios	1,326	0.001	0.825	0.187	0.193	Continua
Tasa de intervención policial	1,315	0	1,149	127	45	Continua
Población total de municipios	1,568	1,078	183,749	516,353	333,321	Continua
Rural-urbano	1,580	0	1	0.401	0.2	Dicotómica
Ingreso	1,389	0	16	4.83	7.98	Categórica
Años de educación	1,568	0	18	4.36	9.85	Continua
Edad	1,580	18	88	17	42.1	Continua
Sexo	1,580	0	1	0.5	0.51	Dicotómica
Actividad relacional	1,557	0	1	0.304	0.1	Dicotómica
Identificación partidista	1,560	1	5	1.39	4.37	Categórica
Percepciones	1,553	0	1	0.497	0.56	Dicotómica
Victimización	1,579	0	1	0.470	0.33	Dicotómica

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, el Conapo y LAPOP 208/2019 para México

Entonces, a mayor violencia también hay menor confianza. Sin una mejora clara en la seguridad del entorno, las personas reprobarán a aquellos organismos estatales cuyo único trabajo es evitar que su seguridad se vea dañada. Este trabajo presenta dos modelos estadísticos, el primero corresponde a las fuerzas policiales y el segundo a las militares. Los resultados concuerdan con la teoría.³

El *p* valor para el modelo respecto a los policías (0.035) muestra una asociación entre la tasa de homicidios por cada 1,000 habitantes y la (des)confianza que existe hacia estas fuerzas del orden. El modelo respecto a la confianza hacia fuerzas militares también arrojó datos en el sentido esperado con ambos métodos. En la siguiente tabla se pueden apreciar los resultados de la regresión lineal.

³ Tanto el modelo de regresión lineal y el modelo logístico fueron puestos a prueba para evaluar si había problemas de homocedasticidad. Cabe resaltar que lo que se representa en la tabla de regresión lineal son errores estándares robustos. Asimismo, ninguna de las variables en ambos modelos tiene problemas de colinealidad con las otras. Ningún coeficiente está inflado y el modelo es estable.

Tabla 2: Regresión lineal

Variables	Confianza hacia fuerzas policiales	Confianza hacia fuerzas militares
	Modelo 1	Modelo 2
Tasa de homicidios por cada 1,000 habitantes	-0.585 ** (0.379)	-0.073 (0.284)
Intervenciones policiales	-0.000 (0.000)	
Población total del municipio	0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)
Municipios rurales	0.191 (0.147)	0.167 (0.148)
Ingreso	0.006 (0.012)	0.013 (0.012)
Años de escolaridad	-0.058 *** (0.017)	-0.037 ** (0.014)
Edad	0.005 (0.003)	0.014 *** (0.003)
Mujer	0.255 * (0.120)	-0.341 *** (0.110)
Actividades relacionales	0.277 (0.197)	0.168 (0.175)
Identidad partidista		
<i>PAN</i>	-0.168 (0.513)	-0.393 (0.453)
<i>PRI</i>	0.214 (0.366)	-0.108 (0.398)
<i>Otros</i>	0.204 (0.487)	-0.376 (0.429)
<i>Independientes</i>	-0.069 (0.173)	0.070 (0.162)
Percepciones de inseguridad	-0.442 *** (0.120)	-0.314 *** (0.110)
Victimización	-0.572 *** (0.121)	-0.181 (0.116)
Observaciones	833	1,026
R ²	0.1	0.07
Nota	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, el Conapo y LAPOP 208/2019 para México

La primera hipótesis se cumple. Un contexto en el que permea la violencia tiene efectos sobre la confianza que las personas depositan en las instituciones de seguridad. Esto se cumple solo para las policías ($p > 0.05$). Como fue previsto, el modelo expone una diferencia entre la confianza que tienen las personas hacia las policías y militares en contextos violentos. Esto se apega a los trabajos previos que concluyen que los militares son más confiables (Blanco 2013; Bailey, Parás y Vargas 2013; Ortiz Monasterio 2020).

Contrario, pues, a la literatura que menciona que en México el contexto no tiene un efecto en sí (Ishiyama et al. 2018; Arvanitidis, Economou y Kollias 2016), es posible notar que aquí se presenta el caso opuesto. Existe sustento suficiente para confirmar que las características a nivel municipal afectan las actitudes políticas hacia las instituciones policíacas.

En contraste con la segunda variable independiente contextual respecto a las policías, el efecto no es significativo. Esto sugiere dos cosas sobre actitudes políticas en ambientes violentos. En primer lugar, las personas no confían en las policías y la cantidad de intervenciones ante crímenes no cambian las actitudes sobre ellas porque, en segundo lugar, tampoco el desempeño con el que combaten la violencia ya que la confianza inicial es baja.

Los resultados de ciertas variables de control muestran que las características sociales y económicas no están relacionadas con la confianza. La cantidad de personas, el tipo de municipio, el ingreso, la asistencia a reuniones con vecinos y el partido al que adscriben las personas no determinan a la variable dependiente.

Ahora bien, las hipótesis alternativas sí encuentran sustento en los resultados y, de hecho, con más significancia que la variable independiente principal. En cuanto a las fuerzas policiales, los hallazgos se apegan a investigaciones previas: entre más percepciones de inseguridad, menos será la confianza depositada en las policías (Bailey, Parás y Vargas 2013; Pion-Berlin y Carreras 2017). Algo similar sucede con la victimización. Es decir, si una persona es víctima de un crimen, entonces no confiará en la policía debido al extenuante proceso de justicia del cual esta institución es parte de (Blanco 2013).

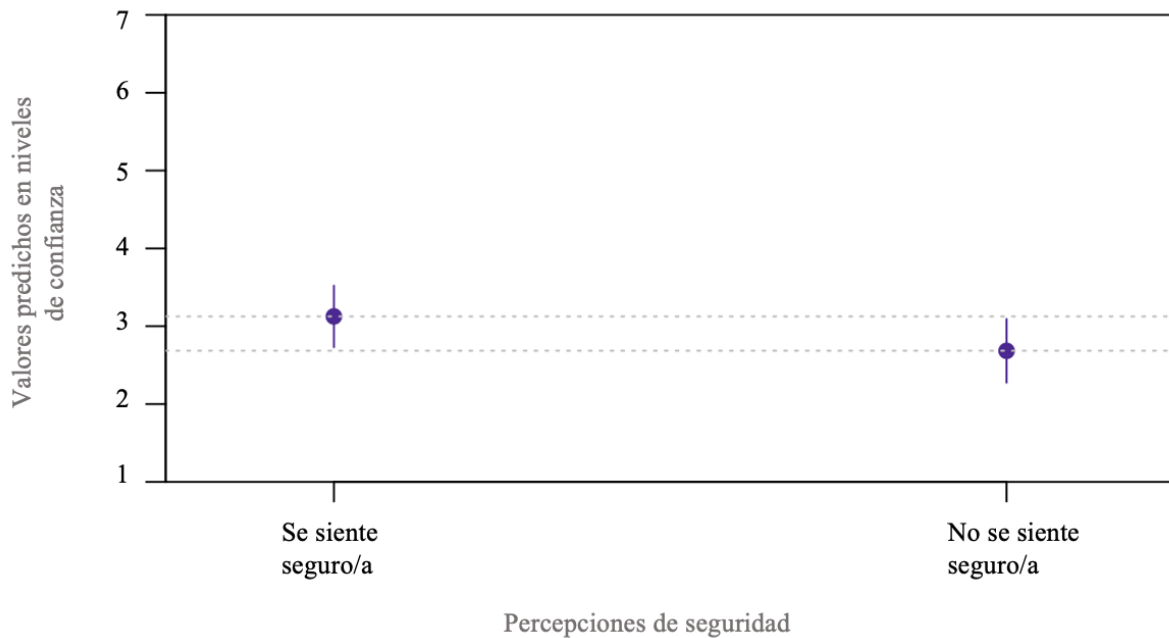
En la gráfica 5 se muestran los valores predichos de la relación entre la confianza hacia policías y las percepciones de seguridad. La gráfica 6 muestra una *boxplot* con el acomodo y sesgo de los datos en cuanto a esta misma relación. Aunque, en ambos casos, la mediana de los datos se encuentra en la misma categoría, es posible notar que los datos están más dispersos cuando las personas se sienten inseguras, mientras que el 50% de los datos se concentran en

niveles más bajo de confianza para las personas que no se sienten seguras. En la gráfica 7 se muestran los valores predichos de la relación entre la confianza hacia policías y la victimización. En la 8 se ve el acomodo y sesgo de los datos. Aquí, la gráfica muestra que la mitad de los datos entre las personas que se sienten seguras y las que no se posicionan en niveles distintos de confianza.

Gráfica 5

Valores predichos: percepciones de seguridad y confianza hacia policías

1-nada de confianza; 7-mucha confianza

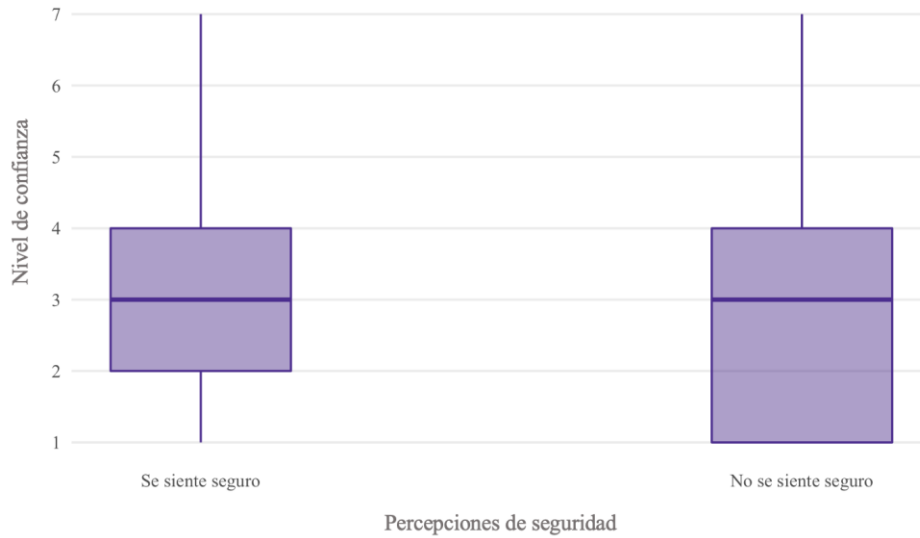


Elaboración propia con datos LAPOP 2018/2019 para México

Gráfica 6

Relación entre percepciones de seguridad y confianza hacia policías

Acomodo y sesgo de los datos
1-nada de confianza;7-mucha confianza

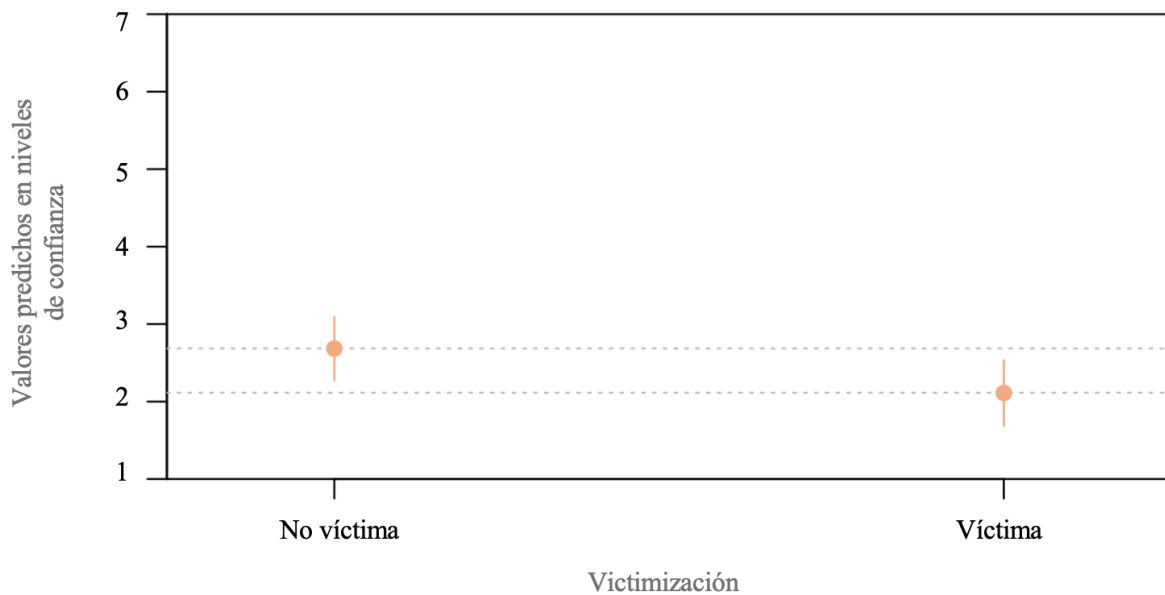


Elaboración propia con datos LAPOP 2018/2019 para México

Gráfica 7

Valores predichos: victimización y confianza hacia policías

1-nada de confianza; 7-mucha confianza

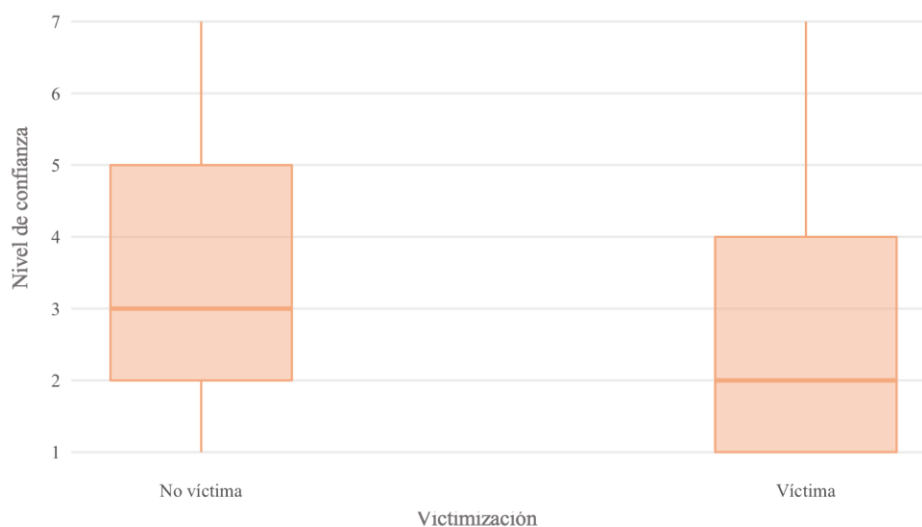


Elaboración propia con datos LAPOP 2018/2019 para México

Gráfica 8

Relación entre victimización y confianza hacia policías

Acomodo y sesgo de los datos
1-nada de confianza;7-mucha confianza



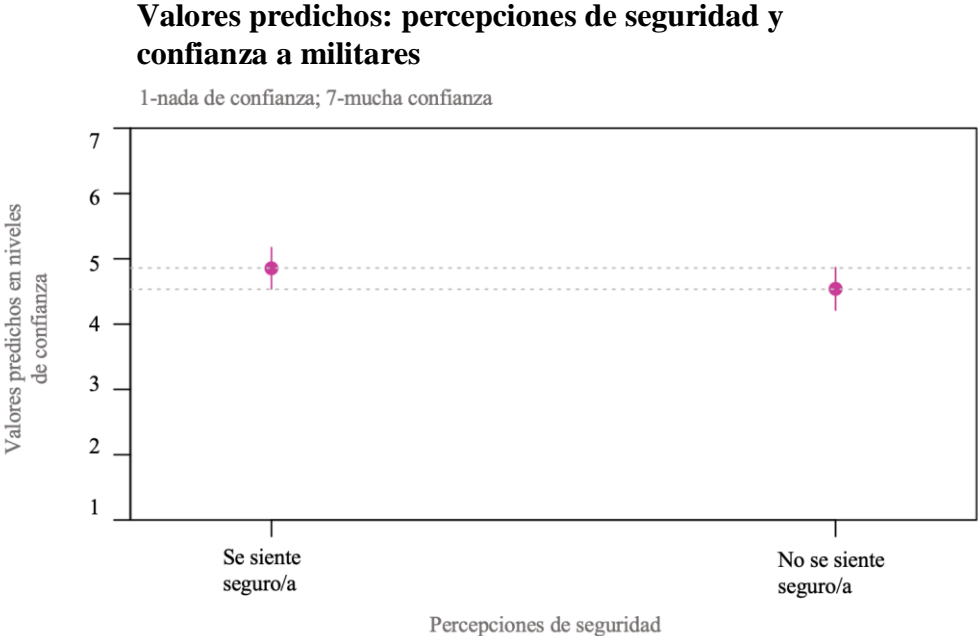
Elaboración propia con datos LAPOP 2018/2019 para México

En México, las policías son las instituciones peor calificadas por las personas. En cambio, la gente sí confía en los militares (Bailey, Parás y Vargas 2013). Ahora bien, también es necesario señalar, sin embargo, que los mecanismos subyacentes de la confianza en las dos instituciones son diferentes. Esto puede afectar la manera en que el contexto influye en la confianza hacia cada una. Hay un componente de temporalidad, es decir, las policías son las primeras en responder ante un evento criminal y son las primeras en ser evaluadas. Por esto mismo, un contexto violento castiga más a las policías, pues los militares son las fuerzas auxiliares que intervienen para resarcir el daño.

Sin embargo, el segundo modelo contradice de alguna manera lo anterior. Lo que afecta a una institución (policías), también afecta a la otra (militares). Las personas que perciben altos grados de inseguridad también confían menos en las fuerzas militares. Las policías suelen ser las instituciones menos confiables en el país, mientras que las fuerzas armadas siempre habían permanecido en la cima de la opinión pública. Aquí, los resultados presentes plantean una cuestión distinta. En la gráfica 9 se puede ver que las personas con niveles de percepciones de inseguridad menor confían más en las fuerzas militares. La 10 muestra que la mitad de las

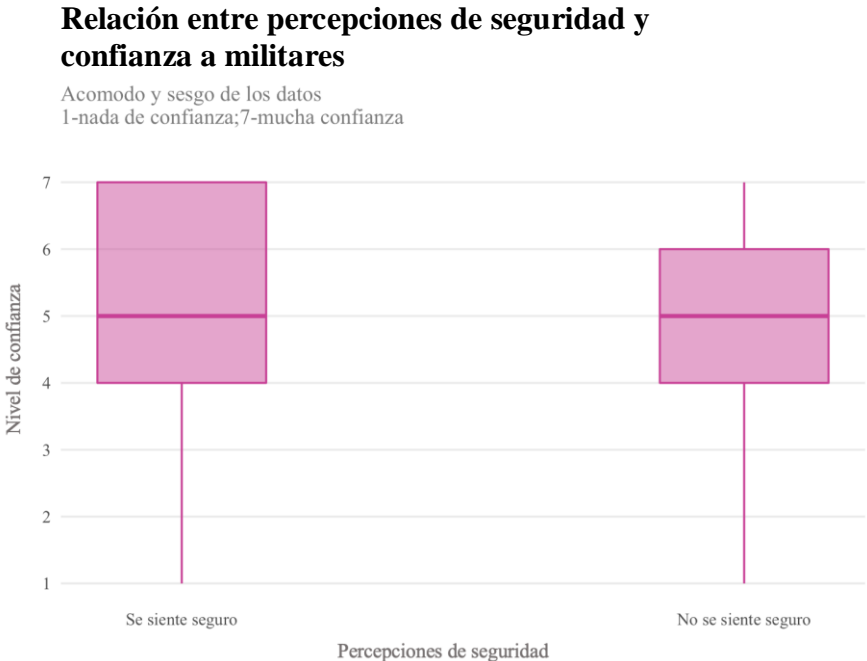
observaciones respecto a las personas que se sienten seguras están en niveles más altos de confianza en comparación a las personas que no se sienten seguras.

Gráfica 9



Elaboración propia con datos LAPOP 2018/2019 para México

Gráfica 10



Elaboración propia con datos LAPOP 2018/2019 para México

Antes, las personas podían voltear hacia las fuerzas militares si se sentían inseguras, pues atribuían esto a las policías. Ahora, los resultados cuestionan lo anterior. La tendencia apunta a que la confianza disminuye. La siguiente sección discute más sobre los efectos del modelo en la confianza y la diferencia entre las instituciones policiales y militares.

8. *Discusión de resultados*

El contexto parece tener más relevancia a la que se le había atribuido antes. Los trabajos que buscan analizar el valor explicativo del contexto en la confianza a instituciones de seguridad son escasos, particularmente los que examinan el caso de México (Ishiyama et al. 2018). La última década ha agitado a muchos municipios, lo cual ha modificado la opinión de las personas en cuanto al desempeño de los elementos que deberían protegerlas.

Si bien el contexto no tiene el mismo peso que las percepciones y la victimización, sí afecta a las personas. La gente se sitúa en una circunstancia determinada y esto influye en todos los aspectos de su vida personal y política. Aquellas que viven en contextos violentos ven un impacto en su bienestar. A una mayor tasa de homicidios, las personas confían menos en las instituciones de seguridad. Las intervenciones de la policía no tienen el mismo efecto. Una posible explicación podría ser que la ciudadanía realmente no evalúa el acto mismo de la intervención, sino el resultado de esta; es decir, se preocupan más por la reducción de la seguridad. En otras palabras, solo se interesan por una dimensión del desempeño.

Respecto a las diferencias entre las opiniones hacia policías y militares, es pertinente añadir que los cuerpos policiales representan el primer contacto con la autoridad que tienen las personas ante un posible crimen y que por eso son evaluadas de una forma peor. Las fuerzas militares son examinadas a la luz del mal desempeño de las policías. Aun así, ahora es posible notar una atribución de culpas a los militares donde antes no la había. Mientras haya más percepciones de inseguridad, menor es la confianza que las personas tienen hacia esta institución. Ciertamente, no son culpados por la violencia que viven las personas, pero sí por cómo se sienten. Después de más de 10 años iniciada la guerra contra el narcotráfico y que la violencia siga en aumento, la ciudadanía ha empezado a responsabilizar a todas las instituciones de seguridad.

Ambas instituciones tienen fallas. El sistema de seguridad pública policial actual se originó en 1917 con la Constitución promulgada en ese año. No fue sino hasta 1998 cuando realmente hubo un cambio que reconocía el derecho a la seguridad pública. Sin embargo, no se pudo consolidar por el aumento en la inseguridad, la poca preparación que la policía tenía y la incapacidad de reformas por parte de un Estado constreñido por políticas heredadas de un poder unipartidista (Davis 2006). A partir de entonces empezó la degradación de la organización del sistema policial.

Por su parte, las fuerzas militares son entrenadas bajo una cultura jerárquica, disciplinada y obediente. Además, nunca fueron ajenas a las localidades en México y el gobierno en el siglo XX se encargó de enmarcarlas bajo una narrativa de que eran una institución honesta. En pocas palabras, la desmilitarización nunca se consolidó y, encima, se reforzó la idea de fuerzas militares rectas (Rath 2013). En la realidad, son una institución opaca y pobremente entrenada para aprehender criminales sin ocasionar daños colaterales (Bailey, Parás y Vargas 2013).

La población, al no notar una diferencia —y, es más, al darse cuenta que la situación empeora—tampoco confiará en las fuerzas militares si se siente insegura constantemente. El despliegue y la presencia de los militares se ha vuelto tal, que las personas ya no atribuyen a los policías todas las fallas de seguridad, las personas ahora se dan cuenta de que también los militares comparten la culpa respecto a la inseguridad.

El resto de las variables también sugieren una degradación de las instituciones de seguridad. De acuerdo con el modelo, las personas con más años de escolaridad desconfían tanto de las policías como de los militares. Tener estudios académicos provee a las personas de más información (también, el hecho de tener más años de escolaridad es un indicador de cierto privilegio socioeconómico y que, por ello, las personas tienen acceso a más información). Con ello, pueden ser más críticas de las instituciones (De Juan y Pierskalla 2016).

En el caso de la edad, el modelo revela que las personas más grandes confían en los militares. Este grupo de individuos fueron testigo de una degradación de la seguridad en manos de las policías; las fuerzas militares no fueron insertadas públicamente en la discusión de seguridad hasta el 2006. Aparte, las personas más grandes en México vivieron más tiempo en el régimen unipartidista y, posiblemente, se inclinan por posturas más autoritarias puesto que existía la noción de que había más control (Davis 2006).

En el caso de las mujeres, existe un escepticismo de su parte hacia los militares (Bailey, Parás y Vargas 2013). La llamada guerra contra el narcotráfico contribuyó al aumento de los asesinatos de las mujeres en el país. (Atuesta y Vela 2020). Es de esperarse, pues, que no confíen en aquellas instituciones. Una expectativa inicial también sería que no confiarán en fuerzas policiales debido a la falta de profesionalidad. No es el caso, pero también es cierto que suelen ser más conservadoras por los valores tradicionales que les son impuestos por la sociedad (Inglehart y Norris 2000). Los valores tradicionales persisten y confiarán más en instituciones que son presionadas para que cada vez implementen más fuerza.

Los hallazgos también podrían viajar a otras partes del mundo, en especial a lugares donde el Ejército esté o haya estado al centro de la estrategia para combatir el crimen organizado y le de continuidad institucional a la política de seguridad pública (Blanco y Ruiz 2013). Igualmente, el argumento puede ser utilizado en países donde la eficacia de las policías sea baja. Por ejemplo, en Guatemala, solo la mitad de los departamentos policiales son considerados efectivos (Alda 2014).

En fin, los resultados muestran una urgencia por mejorar el diagnóstico del ínfimo desempeño de las fuerzas armadas y de las policiales. De continuar así, no solo la violencia aumentará y perjudicará a las personas, tampoco podrá solucionarse por la baja confianza de las personas. En México, la violencia ha alcanzado tales niveles que, en sí misma, mueve las actitudes de las personas. No es necesario ser víctima, pues la violencia está tan presente en los municipios que afecta la relación que existe entre la ciudadanía y los órganos que la protege.

Encima de lo anterior, las percepciones de inseguridad también afectan a los militares, una institución que tradicionalmente estaba apoyada por la opinión pública. Si bien el contexto todavía no modifica la actitud de las personas hacia ellas, el modelo muestra que las personas han dejado de confiar en ellas por sentirse inseguras. Sin confianza hacia las instituciones del Estado, no habrá un buen desempeño. Sin confianza, no habrá denuncias y no habrá una cooperación con las instituciones. Esto se traduce en una falta de aprendizaje y profesionalización por parte de las instituciones de seguridad. De esta manera, no podrán realizar de manera eficiente su trabajo, reproduciendo más inseguridad. En términos más sencillos, México se encuentra en un círculo vicioso.

9. Conclusión

En síntesis, un contexto violento reduce la confianza hacia las instituciones de seguridad. El ambiente en el que viven las personas es una variable determinante para las actitudes políticas. Es importante precisar que esto no es así para todas las instituciones de seguridad. Las personas confiarán menos en las policías mientras vivan en una atmósfera violenta, pero no es así para las fuerzas militares. Sin importar qué tan violento sea el lugar en el que habiten las personas, la confianza hacia esta institución no varía. Es decir que, en principio, seguirán confiando en los militares incluso cuando contribuyan al incremento de la violencia contextual.

Sin embargo, la confianza sí disminuye cuando las personas se sienten más inseguras. Esto sale de los marcos establecidos por la literatura previa. Típicamente, las personas confían bastante en estas fuerzas del orden por ser percibidas como una institución profesionalizada y que respeta derechos humanos. Puede ser que no los culpabilicen por la cantidad de actos violentos que hay alrededor, pero lo cierto es que, al no notar una mejora, les empiezan a atribuir cierto grado de responsabilidad al desconfiar de su desempeño.

Los dos argumentos planteados en esta tesina fueron comprobados empíricamente. El primer argumento sostiene que el uso de las fuerzas armadas en conjunto con la policía trae consigo más violencia de la cual se pretende reducir. La estrategia que el sistema de seguridad suele seguir está enfocada en el ataque contra las cabezas de mando de los grupos organizados. Esto los desestabiliza y los esparce aún más en lugar de contenerlos. El segundo argumento apunta a los efectos que el aumento de la violencia tiene sobre la confianza. Ser espectador y vivir a primera mano la violencia genera una evaluación negativa de las instituciones de seguridad.

Una de las conclusiones de este trabajo es que la confianza hacia las instituciones de seguridad en México se deteriora y, con ello, aumenta la inseguridad cada año. La calidad y la capacidad de las instituciones reduce, lo cual las inhabilita para responder adecuadamente ante las necesidades de la población. En este caso, las fuerzas policiales y militares no pueden responder ante la violencia de manera eficiente y, por lo tanto, generan cada vez más y más violencia. Es necesario capacitar a las fuerzas del orden para mejorar la confianza en ellas y recuperar la seguridad en el país.

Queda por analizar el argumento y metodología de este caso en otros países. Al menos en la región de América Latina, la confianza hacia policías es baja y varios Estados comparten una historia militar (Corbacho, Phillip, & Ruiz-Vega 2014). También, sería interesante no solo llevar el estudio a otras latitudes, pero también explorar otras manifestaciones de la violencia criminal, como los secuestros y las amenazas o bien analizar ciertos eventos que no necesariamente estén relacionados con grupos del crimen organizado como la inseguridad pandillera o peleas por tierras. El enfoque de este trabajo fue sobre el crimen organizado porque, por un lado, la violencia relacionada con ello ha sido una realidad que ha golpeado a México durante varios años y, por otro lado, las fuerzas del orden también han sido corruptas y han tenido vínculos con estos grupos. Sin embargo, es posible analizar otras situaciones porque lo principal que la gente evalúa es el desempeño de las instituciones de seguridad.

El fenómeno de la violencia es complejo y no existen soluciones fáciles. Sería pertinente empezar con una rendición de cuentas por parte de las instituciones de seguridad respecto a los crímenes que han cometido y de los actos de los cuales han sido cómplices. Es importante construir una confianza a partir de la transparencia. Una vez logrado esto (una tarea complicada ya que exhibiría de manera abierta al Estado) es necesario homologar procedimientos de actuación entre policías y el Ejército.

La inseguridad no solo implica a los grupos del crimen organizado, también la protección de la seguridad de las personas en el combate contra el mismo. Es primordial edificar fuerzas del orden capaces y confiables. En contextos inseguros, resulta urgente un cambio de estrategia para que las fuerzas del orden empiecen a navegar por un rumbo correcto en el que las personas puedan sumarse con confianza.

10. Referencias

- Acosta, Mariclaire. 2011. "Ley de Seguridad Nacional: un paso en retroceso." *Dfensor* 9 (8): 13-18. https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_08_2011.pdf.
- Ahmad Nabila, et al. 2011. "Trust in the National Police." *Americas Barometer Insights* 59: 1–10. <https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/I0859en.pdf>.
- Alarcón, Rafael et al. 2015. "Modelado jerárquico por pasos: Análisis multinivel del estrés cotidiano en adolescentes." *Revista mexicana de Psicología* 32 (2): 124-133. <https://www.redalyc.org/pdf/2430/243045364003.pdf>.
- Alda, Erik. 2014. "How are police doing in combating crime? An exploratory study of efficiency analysis of the Policía Nacional Civil in Guatemala." *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management* 37 (1): 87-107. <http://dx.doi.org/10.1108/PIJPSM-02-2013-0010>.
- Altamirano, Melina, Sarah Berens y Sandra Ley. 2020. "The Welfare State amid Crime: How Victimization and Perceptions of Insecurity Affect Social Policy Preferences in Latin America and the Caribbean." *Politics and Society* 48 (3): 389-422. <https://doi.org/10.1177/0032329220940850>.
- Arvanitidis, Paschalis, Atina Economou y Christos Kollias. 2016 "Terrorism's effects on social capital in European countries." *Public Choice* 169: 231–250. 10.1007/s11127-016-0370-3.
- Atanu, Samarjit y Soumyadeep Das. 2019. "OLS: Is That So Useless for Regression with Categorical Data?" En *Advances in Analytics and Applications*. Editado por Arnab Kumar Laha, 227-242. Singapore: Springer Singapore.
- Atuesta, Laura y Estefanía Vela. 2020. *Las dos guerras*. Ciudad de México: Fondo Semilla.
- Bailey, J., Parás, P., y Vargas López, D. 2013. "¿El ejército como policía? correlación de la confianza pública en la policía, el sistema judicial y los militares: México en un contexto comparativo." *Política y Gobierno*: 161-185. <http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/1055>.
- Basombrío, Carlos. 2010. "Qué hemos hecho? Reflexiones sobre respuestas y políticas públicas frente al incremento de la violencia delincinencial en América Latina." *Seguridad Ciudadana en las América* 30.

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/QueHemosHecho_ExecSummary_English.pdf.

- Bateson, Regina. 2012. "Crime Victimization and Political Participation." *American Political Science Review* 106 (3): 570-587. <https://doi.org/10.1017/S0003055412000299>.
- . 2017. "The Socialization of Civilians and Militia Members: Evidence from Guatemala." *Journal of Peace Research* 54 (5): 634-647. <https://doi.org/10.1177/0022343317721812>.
- Bergman, Marcelo y Hernán Flom. 2012. "Determinantes de la confianza en la policía: una comparación entre Argentina y México." *Perfiles Latinoamericanos* 40 (40): 97-122.
- Blanco, Luisa. 2013. "The Impact of Crime on Trust in Institutions in Mexico." *European Journal of Political Economy* 32: 38-55. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2013.06.004>.
- Blanco, Luisa e Isabel Ruiz. 2013. "The Impact of Crime and Insecurity on Trust in Democracy and Institutions." *American Economic Review* 103 (3): 284-288. <http://dx.doi.org/10.1257/aer.103.3.284>.
- Buvinic, Mayra y Andrew Morrison. 1999. How is Violence Measured? Interamerican Development Bank. <https://publications.iadb.org/en/publication/11626/how-violence-measured>.
- Carreras, Miguel. 2013. "The impact of criminal violence on regime legitimacy in Latin America." *Latin American Research Review* 48 (3): 85-107. 10.1353/lar.2013.0040.
- Calderon, Gabriela et al. 2015. "The Beheading of Criminal Organizations and the Dynamics of Violence in Mexico." *Journal of Conflict Resolution* 59 (8): 1455–1485. doi:10.1177/0022002715587053.
- Cantor, David James. 2014. "The New Wave: Forced Displacement Caused by Organized Crime in Central America and Mexico." 33 (3): 34–68. doi:10.1093/rsq/hdu008.
- Catterberg, Gabriela y Alejandro Moreno. 2006. "The individual bases of political trust: Trends in new and established democracies." *International Journal of Public Opinion Research* 18 (1): 31-48. 10.1093/ijpor/edh081.
- Cruz, José Miguel y Angélica Durán-Martínez. 2016. "Hiding Violence to Deal with the State: Criminal Pacts in El Salvador and Medellín." *Journal of Peace Research* 53 (2): 197-210. 10.1177/0022343315626239.

- . 2006. “Undermining the Rule of Law: Democratization and the Dark Side of Police Reform in Mexico.” *Latin American Politics & Society* 48 (1): 55-86. <https://doi.org/10.1353/lap.2006.0005>.
- Davis, Diane. 2018. “The Routinization of Violence in Latin America: Ethnographic Revelations.” *Latin American Research Review* 53 (1): 211–216. <https://doi.org/10.25222/larr.425>.
- De Juan, Alexander, Jan Henryk Pierskalla. 2016. “Civil war violence and political trust: microlevel evidence from Nepal.” *Conflict Management and Peace Science* 33 (1): 67–88. <https://doi.org/10.1177/0738894214544612>.
- Easton, David. 1975. "A Re-Assessment of the Concept of Political Support." *British Journal of Political Science* 5 (4): 435-57. <https://doi.org/10.1017/S0007123400008309>.
- Efendic, A., Pugh, G., Adnett, N. 2011. “Institutions and economic performance: a meta-regression analysis.” *European Journal of Political Economy* 27 (3): 586–599. [10.1016/j.ejpoleco.2010.12.003](https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2010.12.003).
- Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). 2017. ENVIPE: México. <https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2017/>.
- Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). 2021. ENSU: México. <https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/>.
- Estadísticas Vitales. Mortalidad, Defunciones Generales. 2017. INEGI: México. <https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/407>.
- Farfán-Méndez, Cecilia. 2019. “The Structure of Drug Trafficking Organizations and Money Laundering Practices: A Risk Appetite Hypothesis.” *Journal of Illicit Economies and Development* 1 (3): 294-311. <https://doi.org/10.31389/jied.1>.
- Flores-Macías, Gustavo y Mariano Sánchez-Talanquer. 2020. “Building the Modern State in Developing Countries: Perceptions of Public Safety and (Un)willingness to Pay Taxes in Mexico.” *Politics & Society* 48 (3), 423–451. doi:10.1177/0032329220943848.
- Gohdes, Anita y Sabine Carey. 2017. “Canaries in a coal-mine? What the killings of journalists tell us about future repression.” *Journal of Peace Research* 54 (2): 157-174. <https://doi.org/10.1177/0022343316680859>.

- Grönlund, Kimmo, Maija Setälä. 2012. "In Honest Officials We Trust: Institutional Confidence in Europe." *The American Review of Public Administration* 42 (5): 10.1177/0275074011412946.
- Guzmán, Katia. 2020. "Femsplaining: la transformación para las mujeres que no fue." En *Los Mexicanos Frente a la Corrupción y a la Impunidad 2020*. <https://contralacorrupcion.mx/los-mexicanos-frente-a-la-corrupcion-y-la-impunidad-2020/>.
- Hetherington, Marc J. 1998. "The political relevance of political trust." *American Political Science Review* 92 (4): 791-808. <https://doi.org/10.2307/2586304>.
- Hollyer, James, Peter B. Rosendorff, James Raymond Vreeland. 2011. "Democracy and Transparency." *The Journal of Politics* 73 (4), 1191–1205. doi:10.1017/S0022381611000880.
- INEGI. "Defunciones por homicidios." *Tabulados*. <https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/#Tabulados>.
- Inglehart, Ronald y Pippa Norris. 2000. "The Developmental Theory of the Gender Gap: Women's and Men's Voting Behavior in Global Perspective." *International Political Science Review* 21 (4): 441–463. doi:10.1177/0192512100214007.
- Insight Crime ORG. 2021. "Los Chapitos." <https://insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/los-chapitos/>.
- Ishiyama et al. 2018. "What are the Effects of Large-scale Violence on Social and Institutional Trust? Using the Civil War Literature to Understand the Case of Mexico, 2006–2012." *Civil Wars* 20 (1): 1-23. <https://doi.org/10.1080/13698249.2018.1446112>.
- Jackson, Jonathan y Ben Bradford. "What is Trust and Confidence in the Police?" *Policing: A Journal of Policy and Practice* 4 (3): 241-248. <https://doi.org/10.1093/police/paq020>.
- Kim, Harris Hyun-Soo (2014). "Generalised Trust, Institutional Trust and Political Participation." *Asian Journal of Social Science* 42 (6): 695–721. doi:10.1163/15685314-04206002.
- Lemaitre, Julieta. 2014. "Las zonas sin ley y la normalización de la violencia en México y Colombia." Septiembre 2014. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Documento de prensa. https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/pdf/SELA14_Lemaitre_PV_Sp.pdf.

- Lessing, Benjamin. 2015. "Logics of Violence in Criminal War." *Journal of Conflict Resolution*: 1-31. <https://doi.org/10.1177/0022002715587100>.
- Levi, Margaret y Laura Stoker. 2000. "Political Trust and Trustworthiness." *Annual Reviews* 3: 475-507.
- Ley, Sandra. 2018. "To Vote or Not to Vote: How Criminal Violence Shapes Electoral Participation." *Journal of Conflict Resolution* 62 (9): 1963-1990. <https://doi.org/10.1177/0022002717708600>.
- Lewis-Beck et al. 2008. "Perceptions of the Parties and Candidates." En *The American Voter Revisited*, 31-59. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Magaloni, Beatriz, Vida Romero y Alberto Díaz Cayeros. 2016. "Presidential Approval and Public Security in Mexico's War on Crime." *Latin American Politics and Society* 58 (2): 100–123. doi:10.1111/j.1548-2456.2016.00312.x.
- Malone, Mary Fran. (2010). "The Verdict is in: The Impact of Crime on Public Trust in Central American Justice Systems." *Journal of Politics in Latin America*, 2 (3): 99-128. doi:10.1177/1866802x1000200304.
- Malone, Mary Fran y Lucía Dammert. 2020. "The Police and the Public: Policing Practices and Public Trust in Latin America." *Policing and Society* 31 (4): 418-433. <https://doi.org/10.1080/10439463.2020.1744600>.
- Margold, Jane. 1999. "From 'Cultures of Fear and Terror' to the Normalization of Violence: An Ethnographic Case." *Critique of Anthropology* 72 (1): 63-88. 10.1177/0308275X9901900102.
- Medel, Mónica, Yongmei Lu y Edwin Chow. 2015. "Mexico's drug networks: Modeling the smuggling routes towards the United States." *Applied Geography* 60: 240–247. doi:10.1016/j.apgeog.2014.10.018.
- Moncada, Eduardo. 2013. "Business and the Politics of Urban Violence in Colombia." *Studies in Comparative International Development* 48 (3): 308–330. doi:10.1007/s12116-013-9135-x.
- Mishler, William, and Richard Rose. 2001. "What are the origins of political trust? Testing institutional and cultural theories in post-communist societies." *Comparative political studies* 34 (1): 30-62. 10.1177/0010414001034001002.

- Morris, Stephen D., and Joseph L. Klesner. 2010. "Corruption and trust: Theoretical considerations and evidence from Mexico." *Comparative Political Studies* 43 (10): 1258-1285. 10.1177/0010414010369072.
- Nerio Monroy, Ana Luisa. 2011. "La militarización de la seguridad pública y su impacto en los derechos humanos de la población en situación de vulnerabilidad." *Dfensor* 9 (8): 19-22. https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_08_2011.pdf.
- Ng-Mak, Daisy, Suzanne Slazinger y Richard Feldman. 2002. "Normalization of Violence Among Inner-City Youth: A Formulation for Research." *American Journal of Orthopsychiatry* 72 (1): 92-101. 10.1037/0002-9432.72.1.92.
- Norris, Pipa, Kenneth Newton. 2000. "Confidence in public institutions: Faith, culture or performance?" En *Disaffected democracies: What's troubling the trilateral countries?* Editado por S. J. Pharr y R. D. Putnam, 52–73. Nueva Jersey: Princeton University Press.
- Pereyra, Guillermo. 2012. "México: violencia criminal y guerra contra el narcotráfico." *Revista mexicana de sociología* 74 (3): 429-460.
- Phillips, Brian. 2015. "How Does Leadership Decapitation Affect Violence? The Case of Drug Trafficking Organizations in Mexico." *The Journal of Politics* 77 (2): 324-336. 10.1086/680209.
- Pion-Berlin, David y Miguel Carreras. 2017. "Armed forces, police and crime-fighting in Latin America." *Journal of Politics in Latin America* 9 (3): 3-26. <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:18-4-10728>.
- Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). 2018/2019. LAPOP: México: https://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/ABMex18-v12.0.2.5-Spa-190207_W.pdf.
- Pulido, Amalia. "Visiones comparadas sobre la violencia criminal." 13 de noviembre de 2020. Centro de Investigación y Docencia Económicas. Webinar, 43:01. <https://www.youtube.com/watch?v=XA9mNGRnfaQ&t=3744s>.
- Rath, Thomas. 2013. *Myths of Demilitarization in Postrevolutionary Mexico, 1920-1960*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- Soares, Rodrigo. 2004. "Development, crime and punishment: accounting for the international differences in crime rates." *Journal of Development Economics* 73 (1): 0–184. doi:10.1016/j.jdeveco.2002.12.001.

- Tealde, Emiliano. "The Impact of Police Presence on Drug-Trade-Related Violence." *Economía* 20 (1): 61-82. <https://www.jstor.org/stable/26849050>.
- Trejo, Guillermo y Sandra Ley. 2017. "Why Did Drug Cartels Go to War in Mexico? Subnational Party Alternation, the Breakdown of Criminal Protection, and the Onset of Large-Scale Violence." *Comparative Political Studies*: 1-38. doi:10.1177/0010414017720703.
- . 2019. "High-Profile Criminal Violence: Why Drug Cartel Murder Government Officials and Party Candidates in Mexico." *British Journal of Political Science*: 1-27. 10.1017/S0007123418000637.
- Trelles, Alejandro, Miguel Carreras. 2012. "Bullets and Votes: Violence and Electoral Participation in Mexico." *Journal of Politics in Latin America* 4 (2): 89-123. doi:10.1177/1866802X1200400204.
- Uildriks, Niels. 2009. "Policing Insecurity and Police Reform in Mexico City and Beyond." En *Policing Insecurity: Police Reform, Security, and Human Rights in Latin America*. Editado por Niels Uildriks, 197-224. Lanham: Lexington Books.
- Von Lampe, Klaus. 2016. "Illegal-market Monopolies and Quasi-Governmental Structures." En *Organized Crime: Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures, and Extra-legal Governance*, 186-216. Londres: Sage.
- Zepeda, Guillermo y Paola Jiménez. 2020. "Obstáculos político-institucionales y sociales." En *Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México*. <https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/142/contenido/1605024010E66.pdf>.

11. Anexo

Tabla 3: Variables dependientes

Institución	Pregunta	Respuesta (recodificada)	Tipo de variable
Fuerzas policiales	b18. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Policía?	1 – Nada 2 3 4 5 6 7 – Mucho	Catagórica ordinal
Fuerzas militares	b12. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en las Fuerzas Armadas?	1 – Nada 2 3 4 5 6 7 – Mucho	Catagórica ordinal

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 208/2019 para México

Tabla 4: Variables sociodemográficas

Variable	Pregunta	Respuesta (recodificada)	Tipo de variable
Rural-urbano	ur. (inciso llenado por entrevistador)	0 - urbano 1 - rural	Dicotómica
Ingreso	q10new. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentran los ingresos familiares mensuales de este hogar, incluyendo las remesas del exterior y el ingreso de todos los adultos e hijos que trabajan?	0 Ningún ingreso 1 Menos de \$620 2 Entre \$620 - \$1,200 3 Entre \$1,201 - \$1,600 4 Entre \$1,601 - \$2,000 5 Entre \$2,001 - \$2,400 6 Entre \$2,401 - \$2,800 7 Entre \$2,801 - \$3,400 8 Entre \$3,401 - \$3,800 9 Entre \$3,801 - \$4,300 10 Entre \$4,301 - \$4,800 11 Entre \$4,801 - \$5,400 12 Entre \$5,401 - \$6,400 13 Entre \$6,401 - \$7,600 14 Entre \$7,601 - \$9,300 15 Entre \$9,301 - \$13,000 16 Más de \$13,000 .a No sabe .b No responde	Categoría ordinal

Educación	ed. ¿Cuántos años de educación tiene?	0 – Ninguno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18+	Continua
Edad	q2. ¿Cuántos años tiene?	[respuesta abierta]	Continua
Género	q1. Género (el entrevistador apunta, pero no lo pregunta)	0– hombre 1 – mujer	Dicotómica

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 208/2019 para México

Tabla 5: Variables político-sociales

Variable	Pregunta	Respuesta (recodificada)	Tipo de variable
Actividad política	np1. ¿Ha asistido a [sesión municipal] durante los últimos 12 meses?	0 - No 1 - Sí	Dicotómica
Identidad partidista	vb11. ¿Con cuál partido político simpatiza usted?	1 - MORENA 2 - PAN 3 - PRI 4 - otros 5 - independientes	Catagórica

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 208/2019 para México

Tabla 6: Percepciones de seguridad y victimización

Variable	Pregunta	Respuesta (recodificada)	Tipo de variable
Percepciones de inseguridad	aoj11. Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a)?	0 - Se siente inseguro 1- No se siente seguro	Dicotómica
Victimización	viclext. ¿Ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincencial en los últimos 12 meses?	0 - No 1 - Sí	Dicotómica

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 208/2019 para México

Tabla 7: Regresión logística ordenada

Variables	Confianza hacia fuerzas policiales	Confianza hacia fuerzas militares
	Modelo 1	Modelo 2
Tasa de homicidios por cada 1,000 habitantes	-0.542 ** (0.293)	-0.964 (0.290)
Intervenciones policiales	-0.999 (0.000)	
Población total del municipio	0.987 (0.000)	-0.993 (0.000)
Municipios rurales	1.235 (0.149)	1.160 (0.148)
Ingreso	1.007 (0.013)	1.008 (0.012)
Años de escolaridad	-0.948 *** (0.016)	-0.955 ** (0.015)
Edad	1.005 (0.004)	1.015 *** (0.003)
Mujer	1.219 * (0.123)	-0.671 *** (0.113)
Actividades relacionales	1.296 (0.208)	1.310 (0.180)
Identidad partidista		
<i>PAN</i>	-0.844 (0.535)	-0.793 (0.454)
<i>PRI</i>	1.206 (0.401)	-0.991 (0.395)
<i>Otros</i>	1.192 (0.466)	-0.754 (0.429)
<i>Independientes</i>	-0.906 (0.183)	1.164 (0.159)
Percepciones de inseguridad	-0.631 *** (0.123)	-0.739 *** (0.111)
Victimización	-0.550 *** (0.131)	-0.809 (0.116)
Observaciones	833	1,026
R ²	0.1	0.07
Nota	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, el Conapo y LAPOP 208/2019 para México